

26ª REUNION — 6ª SESION EXTRAORDINARIA (Especial) — 7/8 DE ENERO DE 1988

**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ;
del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,
doctor JORGE D. SOLANA;
y del señor presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto,
doctor ADOLFO GASS**

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO J. PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO L. ALMIRÓN

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Ramón
AMOEDO, Julio A.
BERHONGARAY, Antonio T.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RÚA, Fernando
DEL VILLAR, Manuel
FALSONE, José A.
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GIL, Francisco
GROSSO, Edgardo Roger M.
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARTIARENA, José H.
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo

MURGUÍA, Edgardo P. V.
NÁPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO, Juan C.
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAADI, Ramón Eduardo
SALIM, Luis
SANCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
TRILLA, Juan
VELÁZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.

AUSENTES, CON AVISO:

BENÍTEZ, Alfredo L.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
JUÁREZ, Carlos Arturo
MOLINA, Pedro E.

SUMARIO

1. Nota del señor senador Nápoli y otros señores senadores por la que se solicita la convocatoria a una sesión especial del Honorable Senado y decreto de citación para la misma. (Pág. 2337.)
2. A moción del señor senador Menem se fija el plan de labor para la sesión de la fecha y se resuelve considerar sobre tablas los temas incluidos en él. (Pág. 2337.)
3. Asuntos entrados:
 - I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 2338.)
 - II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo. (Pág. 2338.)
 - III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la adhesión de la República Argentina al Centro Internacional de Estudios y Conservación y Restauración de los Bienes Culturales. (P.E.-105-120/87.) (Pág. 2338.)
 - IV. Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el artículo 289 del Código Penal. (P.E.-105-121/87.) (Página 2341.)
 - V. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 2341.)
 - VI. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 2342.)
 - VII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 2366.)
 - VIII. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2366.)
 - IX. Peticiones particulares. (Pág. 2366.)
 - X. Proyecto de comunicación del señor senador Jiménez Montilla por el que se solicitan informes acerca de la desaparición de azúcar de los ingenios San Pablo y La Florida, Tucumán (S.-105-451/87.) (Pág. 2367.)
 - XI. Proyecto de ley del señor senador de la Rúa por el que se prohíben y sancionan los actos discriminatorios de todo tipo. Modificación del Código Penal. (S.-105-452/87.) (Pág. 2368.)
 - XII. Proyecto de comunicación del señor senador León por el que se solicita la actualización del precio sostén del girasol. (S.-105-453/87.) (Pág. 2370.)
 - XIII. Proyecto de ley del señor senador Britos por el que se establece la obligatoriedad de la declaración jurada de bienes por parte de los miembros de los tres poderes de la Nación. (S.-105-454/87.) (Pág. 2370.)
 - XIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita se adopten medidas para que las proyecciones cinematográficas en medios de transporte público sean aptas para todo público. (S.-105-455/87.) (Pág. 2372.)
 - XV. Proyecto de comunicación del señor senador Nápoli por el que se solicita se declare de interés nacional el Mundialito Infantil de Fútbol Alto Valle '88. (S.-105-456/87.) (Página 2372.)
 - XVI. Proyecto de comunicación del señor senador Bravo Herrera por el que se solicita la restitución a la provincia de Salta de toda su documentación histórica. (S.-105-457/87.) (Página 2372.)
 - XVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes acerca de la reglamentación establecida en el artículo 8º de la ley 23.287 relativa a su producción de alcohol anhidro. (S.-105-458/87.) (Pág. 2373.)
 - XVIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se solicita la implantación de la venta obligatoria de alcohol en Córdoba y en la región de Cuyo. (S.-105-459/87.) (Pág. 2373.)
 - XIX. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se solicita el aumento del cupo de producción azucarera para la presente zafra. (S.-105-460/87.) (Pág. 2374.)
 - XX. Proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen y otros señores senadores por el que se solicita el pronto cumplimiento de las instrucciones del presidente de la Nación con respecto al pase a retiro del capitán de corbeta Alfredo Ignacio Astiz. (S.-105-461/87.) (Pág. 2374.)
 - XXI. Proyecto de comunicación de los señores senadores Grosso y Mauhum por el que se solicita la efectivización de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referente al uso de la planta repetidora de Canal 12 Telecor S.A., en Catamarca. (S.-105-463/87.) (Pág. 2375.)
4. A moción del señor senador Nápoli se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita se declare de interés nacional el "Mundialito Infantil de Fútbol Alto Valle '88". (S.-105-456/87.) (Pág. 2375.)
5. A pedido del señor senador Solari Yrigoyen se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de Defensa Nacional para el proyecto de declaración del que es autor por el que se solicita el cumplimiento inmediato de las instrucciones del señor presidente

de la Nación en cuanto al pase a retiro del capitán de corbeta Alfredo I. Astiz. (S.-105-461/87.) (Página 2376.)

6. Consideración del proyecto de ley en revisión sobre régimen de coparticipación federal de impuestos. (S.-310/85.) (Pág. 2376.)

7. Consideración del proyecto de ley en revisión de ahorro obligatorio y de modificación de diversas normas impositivas. (C.D.-105-68/87.) Se aprueba. (Página 2414.)

8. A moción del señor senador Solari Yrigoyen se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita un subsidio para el Racing Club de Trelew. (S.-105-257/87.) (Pág. 2472.)

9. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2473.)

II. Inserción. (Pág. 2474.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 23 del jueves 7 de enero de 1988:

Sr. Presidente (Solana). — Queda abierta la sesión especial.

1

CONVOCATORIA

Sr. Presidente (Solana). — Por Secretaría se dará lectura a una nota presentada por varios señores senadores en la que solicitan la realización de una sesión especial, y al decreto respectivo dictado por la Presidencia del cuerpo.

Sr. Secretario (Macris). — (*Lee.*)

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1987.

Señor presidente del Honorable Senado de la Nación doctor Víctor H. Martínez.

S/D.

De nuestra mayor consideración:

Los senadores nacionales que suscriben la presente nota le solicitan la convocatoria a una sesión especial del Honorable Senado de la Nación para el tratamiento de las leyes de Coparticipación Federal e Impositivas que ha ingresado a este cuerpo como consecuencia de su aprobación en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a los efectos de su tratamiento, ya que su mayoría tienen vigencia a partir del 1º de enero de 1988.

Saludamos a usted muy atentamente.

Antonio O. Nápoli. — Juan Trilla.

—Al archivo.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1987.

Visto la nota presentada por varios señores senadores, solicitando la realización de una sesión especial del honorable cuerpo para el día 7 de enero de 1988, y

CONSIDERANDO:

Que dicha petición se ajusta a los alcances del artículo 19 del Reglamento del Honorable Senado,

Por ello:

El presidente del Honorable Senado de la Nación

DECRETA:

Artículo 1º — Cítese por Secretaría a los señores senadores a sesión pública especial (artículo 19 del Reglamento del Honorable Senado) para el día 7 de enero de 1988 a las 16 horas, con el objeto de considerar el siguiente plan de labor:

- 1) Lectura de Asuntos Entrados.
- 2) Proyecto de ley en revisión sobre ahorro obligatorio, reforma impositiva y régimen del cheque.
- 3) Proyecto de ley devuelto con modificaciones estableciendo un Régimen Transitorio de Coparticipación Federal de Impuestos.

Art. 2º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Senado.

Art. 3º — Comuníquese.

VÍCTOR H. MARTÍNEZ.
Antonio J. Macris.

—Al archivo.

2

PLAN DE LABOR

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Solana). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: en la reunión de presidentes de bloque realizada hoy a los efectos de ordenar la labor parlamentaria de esta sesión se convino en tratar en primer término el proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos y, en segundo término, los proyectos de leyes impositivas.

Solicito, en consecuencia, que el cuerpo apruebe este plan de labor y, asimismo, formulo moción para que los mencionados proyectos se traten sobre tablas.

Sr. Presidente (Solana). — En consideración la moción formulada por el señor senador por La Rioja.

Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: de acuerdo con lo convenido este mediodía en la reunión de presidentes de bloque, apoyamos la propuesta formulada por el señor senador por La Rioja.

se declare de interés nacional el "Mundialito Juvenil de Fútbol Alto Valle '88".

Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: teniendo en cuenta la fecha de realización de este acontecimiento deportivo, solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto.

Sr. Presidente (Solana). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Río Negro.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Solana). — Por Secretaría se dará lectura.

—Se lee nuevamente el proyecto de comunicación que figura en el punto XV de los asuntos entrados.

Sr. Presidente (Solana). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Solana). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

5

PEDIDO DE PRONTO DESPACHO

Sr. Presidente (Solana). — Ha quedado reservado el proyecto de declaración del señor senador Solari Yrigoyen y otros señores senadores por el que se solicita el pronto cumplimiento de las instrucciones impartidas por el señor presidente de la Nación disponiendo el pase a retiro del capitán de corbeta Alfredo Ignacio Astiz.

Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Solicito el pronto despacho de este proyecto de declaración presentado juntamente con otros señores senadores de la Unión Cívica Radical, dada la trascendencia que le asignamos, para que se cumplan a la brevedad posible las instrucciones impartidas por el señor presidente de la Nación para que sea pasado a retiro el señor Astiz, oficial de la marina de guerra.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Solana). — Como hay asentimiento, el proyecto de declaración pasará a la

Comisión de Defensa Nacional, con recomendación de pronto despacho.

6

COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

Sr. Presidente (Solana). — Corresponde considerar el primer tema del plan de labor, es decir, el proyecto de ley en revisión sobre régimen transitorio de coparticipación federal de impuestos.

Por Secretaría se dará lectura.

—Se lee nuevamente el proyecto de ley que figura en el punto VI/1 de los asuntos entrados.

Sr. Presidente (Solana). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: esta tarde vamos a tratar en el recinto del Honorable Senado de la Nación un proyecto de ley largamente esperado, especialmente por las provincias.

En diciembre de 1984 concluyó la vigencia de la ley que había regido desde 1979, dictada como consecuencia de decaer la vigencia u otra norma sancionada en 1947.

Desde entonces hasta este momento en que tratamos este proyecto, el régimen fiscal entre la Nación y las provincias estuvo dividido en dos etapas importantísimas: la de 1985/86 y la de 1987.

A mediados de 1985 se celebró un convenio entre la Nación y las provincias al tiempo del tratamiento del presupuesto de aquella época. Fue un acuerdo entre todos los gobernadores de la República y el gobierno nacional, representado por su Secretaría de Hacienda, del que participamos algunos de nosotros como representantes de las cámaras de Diputados y Senadores. Inclusive, estuvimos presentes en su firma.

Ese convenio a que he hecho referencia tenía una prórroga automática para el año 1986. En 1987 no hubo convenio sino que se trabajó a través de una serie de conversaciones que se fueron produciendo con el objeto de mantener la armonía en la relación del Tesoro nacional y los tesoros provinciales, a fin de cubrir las necesidades de cada uno de los presupuestos provinciales.

Es evidente que esa situación no se puede prolongar porque cada vez se complica más el proceso de necesidades de las provincias en re-

lación con las de la Nación en lo que se refiere al tratamiento de los impuestos, lo que origina reclamos. Tal el caso de lo que ocurre casi diariamente con los reclamos sobre los aportes del Tesoro.

En esta oportunidad nos encontramos con este proyecto incluido en el mensaje del Poder Ejecutivo que tomó en cuenta proyectos parlamentarios existentes en la Cámara de Diputados y en el Senado, y muy especialmente el de nuestros colegas el señor senador Sapag y el que fuera senador por la provincia de Corrientes, y actual gobernador, doctor Leconte.

Hace unos momentos intenté hacer referencia a la relación existente entre el número y la calidad de los impuestos coparticipables, lo que tiene relación con la distribución primaria que se logrará como consecuencia de esta ley.

El Poder Ejecutivo —reitero— envió este proyecto en su mensaje al convocar a sesiones extraordinarias. Esta iniciativa fue objeto de un intenso estudio en la Cámara de Diputados motivado en las inquietudes de los distintos sectores políticos y, fundamentalmente, en razón del interés de cada una de las provincias.

Durante las conversaciones que se desarrollaron estuvieron presentes hombres que representaron a cada uno de los partidos políticos entre los que se incluye a algunos señores senadores.

En resumen, lo que quiero resaltar es que se trata de un proyecto de ley que fue intensamente estudiado y en el que, inteligentemente, se ha previsto una vigencia transitoria, de manera de poder tener en cuenta la experiencia recogida en las normas anteriores sobre el particular. Este proyecto tiene prevista una vigencia de dos años, tiempo suficiente para el análisis del comportamiento de las nuevas modalidades que se han incluido y, fundamentalmente, lo relativo a los porcentajes de la distribución secundaria, respecto de lo cual algunas provincias estiman que se está lesionando algún tipo de interés.

Con esto quiero decir, señor presidente, que no se trata de una ley superficial sino profunda, que se ocupa de los intereses económicos y financieros de la República y, de alguna manera, también atiende los intereses permanentes de las provincias, que reclaman autonomía financiera con recursos perfectamente conocidos por lo que puede afianzarse entonces el federalismo político en la República.

Este proyecto de ley o, mejor dicho, la necesidad de un régimen de esta naturaleza, con cierto tipo de metodología, debe presentar determinada forma y, en ese sentido, se ha ido profundizando. En primer lugar, de acuerdo con lo establecido en el propio artículo 4º de la Constitu-

ción Nacional, que indica cómo se alimenta el Tesoro Nacional para abastecer los gastos del Estado; también, según lo establecido en el inciso 2º del artículo 67 —artículo que se refiere a las atribuciones del Congreso—, en donde se menciona que los impuestos directos son de excepción y deben declararse por ley nacional como consecuencia de necesidades imperiosas de la República. Es decir, los impuestos directos son atribuciones de las provincias, que no delegaron en la Nación.

Por otra parte, se establece como aspecto implícito el hecho de que los llamados impuestos indirectos son facultades concurrentes de la Nación y de las provincias. Puede haber impuesto al valor agregado en el orden nacional, pero también a los ingresos brutos, que presentan la misma metodología para cada uno de los distritos de la Nación.

A título de aclaración, simplemente diré que son impuestos directos aquellos en los que el contribuyente que los paga absorbe su costo con sus propias rentas o patrimonio. Pueden ser, por ejemplo, el impuesto a los capitales o a la contribución territorial.

En cuanto a los impuestos indirectos, son aquellos en los que el contribuyente que los paga no los absorbe como en el caso anterior, sino que los incluye en el precio de venta de los bienes o servicios que presta.

¿Cuándo empezó a crearse este sistema? Precisamente, cuando comienzan a complicarse las finanzas del país, y a fijarse impuestos de cierta envergadura, con una gran cantidad de contribuyentes en el territorio nacional; ello implica, a su vez, aportes importantes para los tesoros de la Nación. Con algunas alternativas propias existía la necesidad de que al ser concurrentes, los impuestos no se aplicaran simultáneamente en la Nación y en las provincias, por un lado, para evitar la doble imposición y, por otra parte, también con vistas a un manejo institucional y técnico de estos impuestos, provocando una mayor recaudación y para que al ser distribuidos, en lo referido a cada uno de los tesoros, tanto nacional como provinciales, se produjera un beneficio conjunto.

Esto comenzó a principios de la década del 30, cuando se creó el impuesto a los réditos, y para la misma época el impuesto a las transacciones y, posteriormente, a las rentas, que requería, de alguna manera, un trámite de esta naturaleza.

La primera ley que habla de metodología de coparticipación es la que lleva el número 12.139, del año 1935, que legisló en la materia después de muchos años de ciertos inconvenientes, sobre todo en lo referido a la doble imposición —hago

alusión al impuesto a los sellos. Desde 1894, fecha en que se concretó un ordenamiento, hasta 1935, correspondiente a la ley citada, se produjeron enormes dificultades y litigios entre las partes interesadas, no solamente en lo referido a los particulares o privados, sino también desde el punto de vista público entre la Nación y las provincias.

Aclaro que estoy tomando algunas de las leyes a los efectos de dar un panorama global para enfatizar luego algunos aspectos particulares.

En 1951 se sancionó la ley 14.060, que establece durante diez años un impuesto sustitutivo a la herencia con el fin de disponer un ordenamiento técnico y administrativo para la recaudación en todo el país y para su distribución entre la Nación y las provincias.

En 1954 se perfecciona el tema de la distribución y el análisis del impuesto de sellos, por cuanto también se encontraron deficiencias, inclusive en la primera ley, que se trataron de subsanar.

Este aspecto anecdótico nos da la idea de la necesidad de regular de alguna forma los cada vez más complejos impuestos, tanto desde el punto de vista técnico como de recaudación y la gran base impositiva que se creaba en razón de los nuevos gravámenes establecidos.

Me voy a referir ahora a las leyes 12.956 y 20.221, de 1947 y 1979, respectivamente. Estas dos leyes determinan en primer lugar los impuestos que serán coparticipables y, a su vez, la forma en que se distribuirán. Desde luego, en el segundo caso se considera un mayor número de impuestos como, por ejemplo, los impuestos a las ganancias, a los premios en los juegos de azar, a la tierra libre de mejoras a las ganancias eventuales, a la regularización patrimonial —comúnmente llamado blanqueo—, al capital y patrimonio, de sellos y el IVA. En el caso anterior había algunos menos, legislados por otras leyes existentes.

En el proyecto que estamos tratando, la lista de impuestos que se incluyen es mucho más numerosa y más detallada; se refiere en forma global a todos los impuestos que deben ser incorporados en la masa coparticipable, excluyendo las excepciones que se especifican en su artículo 2º. No se incluyen, por ejemplo, los derechos de importación y exportación previstos en el artículo 4º de la Constitución Nacional; aquellos ya previstos en leyes especiales de distribución, como el FONAVI —Fondo Nacional de la Vivienda— los impuestos a crearse con fines específicos; aquellos cuyo producido se

afecte a obras o inversiones determinadas, que deben ser establecidos por ley especial; y los gravámenes que surjan del Congreso Nacional como Legislatura de la Capital Federal.

Parece oportuno que a esta altura de mi exposición indique, a los efectos de las aclaraciones respectivas, cuáles son los impuestos que se incorporan en la masa coparticipable, que en el proyecto aparecen englobados en la expresión “todos”.

Se trata de los impuestos a las ganancias, a los premios de sorteos y concursos deportivos, de regularización impositiva sobre capitales y patrimonio, de regularización patrimonial, al valor agregado, internos, adicionales a los aceites lubricantes, sobre transferencia de títulos y valores, a los beneficios eventuales, a los beneficios adicionales provenientes de inversiones de capital extranjero, a los débitos de los depósitos en entidades financieras —que hoy trataremos también a continuación de este proyecto—, sobre la venta, compra, cambio o permuta de divisas y sobre consumo de combustibles. Respecto de este último tributo se incluye lo establecido en la ley 17.597 acerca del exceso del Fondo de Combustibles, es decir, se coparticipará en la medida que exceda lo acreditado al Fondo de Combustibles, incluso el de la ley 17.597.

Antes de seguir adelante con la distribución de la masa coparticipable, debo destacar que la estructura de este proyecto es dinámica y puede decirse que es diferente de todas las leyes que en este sentido se sancionaron con anterioridad.

Para concretar una ley armónica y con sentido concreto es necesario referirnos a los cuatro anclajes fundamentales de esta norma legal. Así ocurrió en la ley de 1947, también en la de 1979, y ahora aparece en este proyecto con mejor metodología a fin de lograr su perfeccionamiento.

¿Cómo se forma la masa coparticipable? Para explicar esto hay que analizar cómo se realiza la distribución primaria, o sea el reparto entre la Nación, las provincias y algunos fondos específicos. La ley anterior incluía el Fondo de Desarrollo Regional, que en este proyecto no se incluye e implícitamente se extingue al 31 de diciembre de 1987. Ya no tenía sustento legal a partir de diciembre de 1984, pero la costumbre le había dado continuidad a fin de que las provincias recibieran alguna contribución para la realización de alguna obra de tipo regional.

En este proyecto figura un fondo específico cuya participación es del 1 por ciento, el que será destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, y está prevista su distribución en jurisdicción del Ministerio del Interior,

el que será encargado de su asignación. Así mismo, se prevé la asignación del 2 por ciento en forma automática para el recupero del nivel relativo de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

Otro encaje fundamental de este proyecto es que se trata de una ley por adhesión, de una ley convenio, en la que cada una de las provincias tiene que indicar de qué manera destina su participación a través de una ley especial.

Volviendo a la distribución primaria, podemos decir que la Nación se reserva el 42,34 por ciento de los fondos de la masa coparticipable, que las provincias recibirán globalmente el 54,66 por ciento, y que existirán dos fondos: uno del 2 por ciento, para el recupero del nivel relativo de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz; y otro del 1 por ciento, que es el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.

Con respecto al fondo del 2 por ciento, la distribución secundaria entre las provincias beneficiarias es la siguiente: Buenos Aires recibirá el 1,5701 por ciento, mientras que Chubut, Neuquén y Santa Cruz percibirán el 0,1433 por ciento cada una.

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, que dijimos que se formaba con el 1 por ciento de la masa coparticipable, lo maneja directamente el Ministerio del Interior pero su asignación está condicionada a que aparezca una necesidad imperiosa de las provincias que lo recibirán.

El artículo 4º —como es de conocimiento de los señores senadores que tienen en sus bancas el proyecto de ley— detalla los porcentajes que se asignarán a las provincias. En su momento, cuando tratemos el proyecto en particular, ampliaremos este concepto en el artículo pertinente.

Quiero decir simplemente que la ley anterior establecía que la Nación retenía el 48,5 por ciento, las provincias recibían otro tanto, y se destinaba al Fondo de Desarrollo Regional el 3 por ciento. Es decir, que las provincias recibirán en forma directa 6,16 puntos más que en el sistema anteriormente vigente.

Las pautas que se han tenido en cuenta para determinar el porcentaje de cada provincia son las mismas que se usaron para la ley anterior. Eso significa que se tiene en cuenta la brecha de desarrollo, la población en proporción directa, y la densidad en proporción inversa. Respecto de la brecha de desarrollo se debe tener en cuenta fundamentalmente que considera la calidad de vida, la vivienda, los recursos humanos vinculados con su grado de educación, co-

nocimientos técnicos y trabajo, así como también el número de automóviles per cápita.

El artículo 5º, al cual ya hice referencia, prevé precisamente la asignación expresa al Ministerio del Interior del uno por ciento sobre el monto total de la masa coparticipable, y el 6º asigna al Banco de la Nación la tarea de distribuir los fondos en función de las alícuotas que para cada provincia se prescriben en el artículo 4º, en forma automática y diaria. Esto quiere decir que hay una oxigenación financiera de los tesoros provinciales y, a su vez, se elimina con inteligencia política un problema que creaba un litigio permanente, fuera cual fuere el signo político del gobierno central, por las discusiones de los secretarios de hacienda provinciales con su par nacional. Automáticamente, pues, como consecuencia de una disposición directa de la ley, el Banco de la Nación habrá de distribuir los fondos que vayan recibiendo las cuentas que la Dirección General Impositiva tiene precisamente en el referido banco, efectuándose esta distribución de fondos a las provincias sin cargo alguno para ellas.

El artículo 7º fija un parámetro o piso del monto total de impuestos que van a recibir las provincias en forma global. Me refiero a que se ha establecido que recibirán en conjunto por lo menos el 34 por ciento. El monto a distribuir no podrá ser menor que el 34 por ciento de la recaudación de recursos tributarios que tenga la administración central, sea por impuestos coparticipables o no coparticipables, excluyendo por ciento, aquello con afectación específica o cuentas especiales. Tiene el sentido de dar una estabilidad porcentual a lo que recaude la administración central y lo que se asigne a las provincias, a efectos de evitar que por diferencias de signo político o mediante la aplicación de medidas de diversos tipo se pueda eludir de alguna manera la entrega de esos recursos.

También, como consecuencia de la división secundaria, el artículo 8º determina que la Nación proveerá a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al territorio nacional de Tierra del Fuego de una participación en los impuestos como la establecida históricamente por este concepto, "la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987". Estos fondos provendrán de los que corresponden a la Nación, es decir, del 42,34 por ciento.

El artículo 9º determina algunas obligaciones que las provincias tienen para el cumplimiento de esta ley. En primer lugar, deberán dictar una ley especial para adherirse al sistema; es decir,

que dentro de la concepción de la ley convenio se requiere la adhesión de las provincias, pero no desde el punto de vista administrativo, ya que tiene que existir una ley especial.

Se requiere también que las provincias tomen recaudos para evitar las dobles imposiciones, tema que se vincula con la salud del marco económico y financiero de la República. Asimismo, debe establecerse una metodología clara, especialmente para aquellos impuestos donde puede haber confusión en el ámbito nacional y el provincial, como los casos de ingresos brutos, IVA y sellos.

La ley 20.221 había creado una comisión especial, la Comisión Federal de Impuestos. Tuvo una vigencia interrumpida, ya que la ley anterior rigió hasta 1984. Ahora se recrea esta comisión en el artículo 10, que también establece su composición; veintitrés miembros, uno representante de la Nación y uno por cada provincia. El proyecto exige que estos representantes sean personas especializadas en materia impositiva.

Los gastos de mantenimiento de esta comisión son proporcionales a las alícuotas del artículo 4º, y su ámbito de funcionamiento es el Ministerio de Economía de la Nación.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor Víctor H. Martínez.

Sr. Trilla. — El artículo 11 establece las funciones de la Comisión Federal de Impuestos, ampliándolas un tanto con respecto a la ley anterior. En primer lugar, aprueba el cálculo de los porcentajes de distribución que efectúa la Nación a los efectos de tener una superintendencia en este tema, y en razón de ser un tribunal para considerar los reclamos que puedan formular las provincias.

Asimismo, la comisión controla la liquidación de las participaciones, debiendo la Dirección General Impositiva y el Banco de la Nación Argentina suministrar la información pertinente.

La comisión controla también la actividad del Banco de la Nación a los efectos de determinar si la distribución entre las provincias de lo recaudado se realiza automáticamente.

Desde luego, esta comisión tiene por función dictar normas interpretativas de esta ley.

El artículo 12 declara obligatorias para la Nación y las provincias las decisiones de la comisión. Cada una de las partes podrá, dentro de los 60 días, solicitar revisión ante la propia comisión. Las decisiones tomadas por la comisión en estas revisiones solamente pueden ser objeto del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El artículo 13 fija los términos del cumplimiento por parte de las provincias de las resoluciones que toma la comisión. No debemos olvidar que la comisión cuenta con las voluntades igualitarias de sus veintitrés miembros, de los cuales sólo uno representa a la Nación. Se fija un plazo de 90 días para que las decisiones no recurridas sean cumplidas por la jurisdicción afectada. Si se presentó un recurso de revisión, el plazo para iniciar el cumplimiento será de 60 días a partir de la fecha de notificación de la decisión recaída en el período de revisión. Si las provincias no cumplen con la decisión de la comisión en los términos indicados ésta instruirá al Banco de la Nación Argentina para que retenga los importes conflictivos.

El artículo 14 establece que los contribuyentes que hayan tenido perjuicios como consecuencia de alguna disposición impositiva provincial que la comisión federal indique que no son correctos, podrán recurrir a la justicia para su deducción. Desde luego, previamente tiene el recurso administrativo.

En el artículo 15 se establece la vigencia de esta ley por el término de dos años y que es transitoria, pero tiene el recaudo de la automaticidad. Esto permite que durante estos dos años se observen todas las deficiencias que pudieran existir en la propia ley y la Comisión Federal de Impuestos analizará los reclamos globales que realicen las provincias a los efectos de propiciar la modificación de las respectivas alícuotas y porcentuales. En el supuesto de ser aceptadas esas modificaciones en el conjunto, se recurrirá a otro texto legal. Si todavía hay dificultades, queda el recurso automático de su prórroga y así vamos a evitar lo que ocurrió en 1985 y 1986 con el convenio transitorio, donde existió una conformidad general pero confusa y con episodios conflictivos, y también solucionaremos lo acontecido en 1987, donde fue más dificultoso el tratamiento en el conjunto total de la distribución y en el manejo propio de un asunto que tiene que estar perfectamente claro.

En el artículo 16 se establece con toda claridad la obligación que tienen las provincias que adhieran al sistema de hacerlo por medio de una ley especial. Pueden no dictarla y en consecuencia quedan fuera del sistema si dentro de los 180 días no comunican su decisión de adherirse mediante la ley provincial que se prescribe.

Si no se adhiere voluntaria y explícitamente o en forma implícita, dejando pasar los 180 días, la provincia deberá reintegrar al Tesoro nacional todo aquello que haya recibido a cuenta, y ese importe será distribuido en la proporción pertinente entre todas las demás provincias.

El artículo 17 tiende a terminar con las discusiones existentes entre los tesoros provinciales y el nacional o entre las secretarías de Hacienda provinciales y nacional con respecto a todos los importes reclamados con anterioridad y da como firmes y definitivos todos los montos que han sido distribuidos por el Estado nacional a cada una de las provincias durante los años 1985, 1986 y 1987. De no sentirse conformes, a cada una de las partes le queda como único reclamo la vía judicial.

Por el artículo 18 se deja sin efecto el Fondo de Desarrollo Regional, que había sido creado por la ley 20.221, el que por cierto provocó grandes beneficios en algunos momentos y sirvió a algunas provincias para realizar ciertas obras de infraestructura, las que hubieran resultado imposibles de concretar con sus respectivos presupuestos. En esta norma se establece la forma como opera la provisión de los fondos necesarios para cubrir todas las obras que están en ejecución y también las deudas que como consecuencia de las obras realizadas están impagas; en este sentido, el artículo 18 indica que esos conceptos serán absorbidos por el presupuesto nacional.

La Comisión Federal de Impuestos, que fue creada en la anterior ley de coparticipación, siguió funcionando pero evidentemente quedó en parte sin cobertura legal en razón de que esa ley venció el 31 de diciembre de 1984. Entonces, en el artículo 19 se convalidan la totalidad de las gestiones que pudo haber realizado esa comisión a partir del 1º de enero de 1985, a los efectos de darle claridad y también con el sentido de resguardo y de garantía de que todo lo resuelto tiene una conformidad legal.

En el artículo 20, se asigna a la Contaduría General de la Nación el control de la distribución del concepto anteriormente mencionado, es decir que las provincias no puedan recibir menos del 34 por ciento de lo percibido por la Administración Central.

El artículo 21, que fue uno de los creados por la Cámara de Diputados en relación con el proyecto original, crea la Comisión para el Análisis de las Políticas de Empleo, Salarial y de Condiciones de Trabajo. Este artículo, junto con el siguiente, constituye lo que se ha dado en llamar "garantía salarial". Está relacionado con el problema que fue parcialmente resuelto por el gobierno nacional durante todos estos años y que se refiere a los hechos que se producen cuando en el orden nacional se determina un aumento para los ingresos de los servidores públicos. Cuando el gobierno nacional fija incrementos salariales las provincias se ven obligadas a otor-

gar aumentos semejantes en su plantilla de empleados que realizan iguales tareas.

Como dije, esto fue parcialmente solucionado mediante los aportes adicionales otorgados como consecuencia de las pautas salariales. A pesar de ello, se produjeron muchas discusiones en relación con el volumen de esos montos, por representar o no el total que generalmente la Nación enviaba con referencia a ciertos porcentajes en exceso de la plantilla de empleos a diciembre de 1984.

Esta Comisión va a tener que estudiar durante tres meses la forma de compaginar el problema de los salarios en igualdad de condiciones. Evidentemente, también tendrá que analizar las condiciones de trabajo de esos sectores y la política general de empleo. Además, deberá aconsejar al Poder Ejecutivo, el que tiene la obligación de enviar al Congreso de la Nación, antes de cumplirse tres meses, un proyecto de ley nacional que regularice las situaciones salariales y modalidades complementarias de toda la República.

El artículo 22 es totalmente transitorio y se refiere a la metodología que debe seguirse hasta que se pueda contar con la ley definitiva.

Hace referencia, por ejemplo, a que las provincias deberán recibir los adicionales para abonar los aumentos a sus plantillas de personal "si superan en más de diez puntos la variación acumulada del índice de precios al consumidor en dicho periodo..." (enero-marzo de 1988).

Con el nuevo régimen, las provincias comenzarán a recibir permanentemente los fondos originados en la coparticipación de impuestos, los cuales, como consecuencia de la misma dinámica, sufrirán los incrementos propios de la inflación. Sin embargo, durante los tres primeros meses puede haber algún tipo de dificultades. En ese sentido, fue aceptado el temperamento sugerido por las provincias, en cuanto a que el gobierno nacional participe de alguna manera para solventar cualquier tipo de problemas sobre el particular.

A estos efectos se prevé que los cálculos se realicen en relación a la planta de empleos con los porcentajes propios de los ingresos. Resultan, entonces, operaciones simétricas. Se trata de una advertencia o una medida de salud administrativa, en el sentido de no cubrir vacantes durante estos tres meses. Por supuesto, debe entenderse que se trata de vacantes de la administración, ya no de seguridad, de salud, educación o justicia. De cualquier manera, este aspecto es muy importante e indica que la Nación no deberá aumentar el número de empleados.

Igual alternativa se producirá para las provincias, que tampoco podrán aumentar el número de empleados, con miras a ingresar en este sistema y, a su vez, teniendo la obligación de enviar a la Secretaría de Hacienda un informe referido a la cantidad de empleados al 31 de diciembre de 1987, dentro de los 30 días.

En cuanto a lo ocurrido en los últimos años y, específicamente, en el último, considerando que las provincias son alimentadas por la Nación, además de su propio presupuesto, podemos decir que hubo aportes explícitos e implícitos. El explícito más importante es el de la coparticipación federal, que se estima en un 55,4 por ciento de su total recibido. También es explícito, por ejemplo, el correspondiente al Fondo de Desarrollo Regional, que ahora no se recibe, pero sí se recibe otro tipo de fondos creados en este proyecto. Me refiero a los de coparticipación federal, FONAVI, FENFI y regalías. Ese importante promedio entre las provincias abarca un 26 por ciento del total de sus presupuestos.

Los implícitos son, fundamentalmente, aportes que se realizan a través de la llamada promoción industrial, que abarcan un 18 por ciento en forma global.

Señor presidente: sé que en el curso del debate tendremos alguna intervención más, al tratarse específicamente cada uno de los artículos, con el objeto de hacer algunas aclaraciones. Pero quiero decir, en esta tercera oportunidad en que históricamente se ha redactado un proyecto de ley de coparticipación federal con determinada metodología —las anteriores leyes fueron dictadas en 1947 y 1979, año en que se sancionó la ley 20.221— que la primera ley de este tipo se dictó en un contexto político de la República en donde el gobierno nacional respondía a un determinado signo partidista, e igual signo se presentaba en todas las provincias de aquel entonces. Se trata de las 14 provincias, que participaron en las elecciones del 46.

En el marco imperante en ese momento había, evidentemente, un criterio concreto y podían solucionarse las situaciones en un mismo ámbito de relaciones personales y políticas.

La ley correspondiente a 1979 fue dictada durante la época del proceso, con otro marco político, autoritario, y uniforme en todo el país, por lo menos, en la práctica política.

Si en aquel entonces dominaba totalmente el país el Partido Justicialista —entonces peronista—...

Sr. Martiarena. — Nada que ver con el "pro-

Sr. Trilla. — No dije eso.

Sr. Martiarena. — El marco ideológico era distinto.

Sr. Trilla. — El marco ideológico era distinto y partidista; ya que podemos hablar, con respecto a 1979 del partido militar. También había una unidad de administración que no existe ahora; por eso, fueron necesarias más conversaciones, un mayor esfuerzo para poder atender intereses que respondían a provincias dirigidas por partidos distintos, tanto en el orden nacional como provincial, con partidos provinciales que no existieron en otros tiempos y con diferencias en el gobierno nacional en lo referido al signo político.

Esto es lo que he querido decir, señores senadores.

Por eso me parecen muy importante la labor que se desarrolló hasta este momento y la que se realizará en el tramo final en la discusión que llevaremos a cabo esta tarde. No deja de representar un gran mérito, más allá de las dificultades que puedan existir o las diferencias de criterio que puedan tener algunas provincias que no se consideran lo suficientemente satisfechas. De cualquier manera, y en un contexto político especial que vive la Argentina en estos momentos, llegamos a la conclusión de que con la discusión, con el análisis sereno y la mensura puesta en todo aquello que signifique servir a los altos intereses de la República, pueden lograrse procesos de significación y conclusiones satisfactorias.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — (Lee) "Señor presidente: hoy tratamos leyes de coyuntura, como las tributarias, y de fondo, como la de coparticipación federal, esta última es un anhelo de las provincias que por más de cuatro años han luchado para que se aprobara un régimen de coparticipación que sustituyera a la incertidumbre y al capricho de los funcionarios.

Los justicialistas hubiéramos preferido el debate en profundidad de la crisis económico-social que viven los argentinos. A los justicialistas nos hubiera gustado lograr consenso con el oficialismo, no sólo en este conjunto de leyes sino también en la de asociaciones sindicales, en el tratamiento de la deuda externa, en la reformulación del sistema financiero, en la reactivación del aparato productivo, en el análisis completo del modelo federal, etcétera.

Pero, lamentablemente, la gravedad de la coyuntura, más precisamente el déficit fiscal y el estado de necesidad de nuestras provincias, nos

llevaron a acordar un conjunto de leyes impositivas que, en otra situación, nunca hubiéramos apoyado.

La impericia en el manejo de la política socio-económica del país nos llevó a un estado tal, que los justicialistas debemos optar por el mal menor, esto es, aceptar un conjunto de medidas que atenuarán, aunque transitoriamente a nuestro entender, el déficit del Estado nacional, a cambio de una nueva ley de coparticipación federal para que nuestras provincias recuperen parte de sus legítimos recursos, hoy en manos del poder central.

A partir de la caducidad de la ley 20.221, producida el 31 de diciembre de 1984, el Poder Ejecutivo nacional tomó posesión de los recursos tributarios que no le pertenecían, arrogándose el derecho de su administración en forma arbitraria, situación de tal irregularidad que colocaba a los ministros de Economía provinciales y a los propios gobernadores en el papel de verdaderos mendigos del Palacio de Hacienda.

Decimos que era una especie de imperialismo financiero porque la concentración de recursos en manos del Poder Ejecutivo nacional no se circunscribe únicamente a la recaudación de impuestos. El poder central tiene otras fuentes que son vedadas a las provincias, como por ejemplo, la emisión de moneda, la centralización de los fondos del sistema financiero y la utilización del crédito externo.

La opinión pública tiene instalado en su conciencia el estado de empobrecimiento de nuestras provincias. Sabe de sus múltiples necesidades y también de las terribles dificultades que tienen para pagar los sueldos de sus empleados y las obligaciones contraídas con sus proveedores. Lo que no tiene muy claro son las causas de esta situación, y nosotros, los representantes de las provincias, tenemos la obligación moral de aclararlas.

La gravedad de la situación económica y financiera de nuestras provincias obedece a dos factores fundamentales: el primero, un elemento general a todas ellas que consiste en la falta de planificación y coherencia de una política económica por parte del gobierno central; el segundo, el atraso y muchas veces la falta de retorno de las rentas genuinas de las provincias, apropiadas indebidamente por la administración central.

Resulta muy importante señalar que, pese a los graves problemas que las afligen y a la disimilitud y magnitud de los mismos, la solidaridad de nuestras provincias se manifiesta una vez más en el acuerdo de este proyecto de ley

de coparticipación federal, que espero y anhelo sea aprobado en la sesión de hoy.

Asimismo, y refiriéndome de paso a los proyectos de leyes impositivas, queremos destacar los justicialistas que las reformas introducidas por nuestros legisladores en la Cámara de Diputados atenúan sus efectos más regresivos y procuran evitar consecuencias más negativas sobre las decisiones de inversión.

Creo suficiente citar a manera de ejemplo la fijación de un monto máximo exento del impuesto a los débitos bancarios y la eliminación de las pretendidas modificaciones al impuesto al patrimonio neto, al impuesto sobre la propiedad inmueble y la producción agropecuaria, remitidas originariamente por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

Con respecto a la coparticipación en especial, debo resaltar que el proyecto transforma en regla la coparticipación de todos los impuestos y en excepción la exclusividad a favor de la Nación o de proyectos determinados. Vale decir que la distribución de los recursos será en principio entre las provincias y la Nación, y sólo a favor de esta última cuando el Parlamento así lo decida. Con esto terminamos con una incertidumbre que siempre concluía en detrimento de las provincias, ya fuera de manera global o en forma particular.

La masa de fondos a distribuir está integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, con las siguientes excepciones: derechos de importación y exportación y aquellos cuya distribución entre la Nación y las provincias esté a la fecha prevista en otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación; no se incluyen los impuestos nacionales cuyo producido se afectare a la realización de inversiones, servicios, obras y fomento de actividades declaradas de interés nacional por acuerdo entre la Nación y las provincias. A su vez, se incluyen los impuestos existentes o a crearse sobre el consumo de combustibles en la parte de su recaudación que exceda lo acreditado al Fondo de Combustibles.

Este cambio cualitativo del proyecto conlleva un cambio cuantitativo que importa un incremento general de recursos para el conjunto de las provincias del orden del 30 por ciento, aproximadamente.

La distribución primaria se efectúa de la siguiente manera: 54,66 por ciento para las provincias; 42,34 para la Nación; 1 por ciento para el fondo de aportes del Tesoro Nacional, con el fin de cubrir situaciones de emergencia y de equilibrio financiero, y 2 por ciento como apor-

te destinado al recupero del nivel relativo de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Podemos decir que se espera un incremento en la masa coparticipable de un 29,64 por ciento. Esto se va a lograr por el incremento de la distribución primaria en casi un 8 por ciento y por el aumento de la masa de los impuestos coparticipables en un 21 por ciento.

El incremento particular de las provincias es, con este régimen, aproximadamente el siguiente: Santa Cruz, 72,29 por ciento; Chubut, 70,24; Neuquén, 50,96; Buenos Aires, 41,56; Mendoza, 34,04; Córdoba, 22,34; Santa Fe, 21,26. En cuanto al resto de las provincias se estima que recibirán fondos adicionales en un 25 por ciento.

También es destacable en este proyecto la cláusula de garantía fijada por el artículo 7º, según el cual las provincias nunca podrán recibir menos del 34 por ciento del total de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central.

De esta forma, se mantendrá la relación de recursos entre la Nación y las provincias en un porcentaje mínimo a favor de estas últimas, que no podrán verse afectadas en caso de que la Nación decidiera incrementar sus recursos tributarios que son exclusivos en desmedro de los que son coparticipables.

Un punto importante lo constituye el artículo 18 del proyecto, que garantiza la continuación de las obras y el pago de las deudas por ellas devengadas, correspondientes a proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Regional que ha sido eliminado.

Además, quiero resaltar el artículo 21 del proyecto, que crea la Comisión para el Análisis de las Políticas de Empleo, Salarial y de Condiciones de Trabajo, que es una comisión para la compatibilización de las políticas salariales de las provincias y la Nación. De esta manera se contribuirá a la equiparación de los niveles salariales de todos los empleados públicos y se evitarán molestas e injustas acusaciones hacia las administraciones provinciales sobre el empleo público.

Finalmente, se ha logrado con el artículo 22, que se reconozcan a favor de las provincias los mayores incrementos salariales que pudieran producirse en los gastos en personal, de tal forma que cualquier desfasaje en este rubro será soportado por la Nación.

Creo que esta ley puede recibir críticas de algunos colegas y considero que es perfectible; pero constituye la base seria para funcionar una

de las provincias entre sí, por lo que propongo su aprobación."

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: vengo a este debate, que sin duda alguna me trae muchos recuerdos de mis funciones como gobernador de la provincia de Corrientes en los últimos cuatro años, para tratar este régimen transitorio de coparticipación entre la Nación y las provincias. Digo esto porque se trata de un régimen transitorio de recursos fiscales entre la Nación y las provincias más que de un régimen concreto de coparticipación.

Vengo a este Senado con el propósito de aunar esfuerzos para servir a la República, para trabajar mancomunadamente en beneficio de los intereses de la Nación, del interés general, con los mejores propósitos de buscar coincidencias, pero también de marcar, en los casos en que sea necesario, las diferencias fundamentales, cuando está en juego el desarrollo del país, el objetivo de conseguir que esté mejor proporcionado y, sobre todo, el respeto por el federalismo.

El federalismo no es una dádiva que reciben las provincias de la Nación ni tampoco representa la puja permanente de los recursos por una mejor distribución. El federalismo comprende un concepto mucho más amplio. Yo diría que el federalismo no es el medio idóneo para la descentralización sino que es la descentralización misma. Y si queremos recuperar al país, si queremos dar legitimidad a todo lo que estamos haciendo, es necesario que respetemos los principios federales que establece la Constitución. De esta manera obtendremos un desarrollo equilibrado y armónico del país.

Venimos a este debate a tratar este régimen transitorio de coparticipación federal de recursos fiscales entre la Nación y las provincias, que en su artículo 15 establece que regirá desde el 1º de enero de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1989, previéndose también la prórroga automática, ante la inexistencia de un régimen sustitutivo del que estamos considerando. Queremos señalar que este carácter transitorio no se compeadece con lo previsto en el artículo 21 del proyecto, ya que allí se prevé la formación de una comisión que propondrá cláusulas de garantía salarial que obligarán recíprocamente a ambas jurisdicciones de Gobierno. Señalamos que ésta es una notoria contradicción del proyecto.

Nosotros consideramos, y digo nosotros, porque estoy hablando también en nombre del señor senador Aguirre Lanari, es decir en representación del Pacto Autonomista-Liberal de Corrien-

tes, que debemos sancionar un régimen definitivo de coparticipación para evitar lo que ya nos ocurrió en los cuatro años de gobierno, durante los cuales nos manejamos con parches y acuerdos transitorios, que muchas veces no se cumplieron, a pesar que los gobernadores firmamos esos acuerdos con el señor presidente de la República.

Recuerdo, que a efectos de integrar la región para, de esta manera, integrar la Nación, en enero de 1984, inmediatamente después de que nos hicimos cargo de nuestros mandatos constitucionales otorgados por los pueblos de nuestras respectivas provincias, realizamos en Corrientes una reunión de gobernadores del Litoral.

Allí, en presencia del entonces ministro del Interior doctor Antonio Tróccoli, planteábamos la necesidad imperiosa de contar con un régimen de coparticipación federal para sustituir la ley 20.221. Transcurrieron cuatro años de gestión y no pudimos lograrlo. Hablamos también entonces de un régimen de promoción industrial y de otras cuestiones vinculadas con la plena vigencia del federalismo.

En este momento está a consideración un régimen que prevé dos años de duración y nos vemos afectados porque de un porcentaje de 4,03 se nos reduce la participación al 3,86. Además, no se indica en este artículo 4º, cuáles son los índices o prorrateadores que se utilizan para la distribución secundaria.

Esto nos preocupa enormemente por supuesto, porque una provincia de menor desarrollo relativo, como es la nuestra, sufre esta disminución en su índice de coparticipación, cuando en valores históricos tendríamos que estar en uno superior o por lo menos similar a otras que tienen un desarrollo parecido a la nuestra. Por otra parte también la supresión de cuentas especiales, como la del Tabaco, nos parece que implica atribuirle facultades al Poder Ejecutivo que la misma Constitución no le reconoce.

El proyecto elimina también el Fondo de Desarrollo Regional y establece que las obras que se encuentran autorizadas, en proceso de licitación, contratadas o en ejecución al 31 de diciembre de 1987, así como las deudas generadas por las mismas, serán continuadas hasta su finalización.

Las partes no podrán efectuar reclamo administrativo alguno, quedando expedita la vía judicial. A pesar de que estamos legislando para 1988-1989, el artículo citado establece un perdón retroactivo a 1985, que pretende desestimar reclamos actualmente en gestión. El Estado nacional ha incumplido muchas cosas. Recaudó, por una ley especial, fondos para las provincias

afectadas por las inundaciones y ese aparente gesto solidario fue desvirtuado por el Tesoro que retaceó las entregas o simplemente se quedó con ellas. Iguales consideraciones valen para los sucesivos estados de Emergencia Agropecuaria, una ley meramente declarativa que nunca sirvió para concretar la asistencia que se debía a las provincias por el infortunio o por la calamidad.

En definitiva, señor presidente, nosotros, que no fuimos consultados de ninguna manera para este proyecto, que no fuimos escuchados en ninguna oportunidad —ya que éste fue un acuerdo que se realizó, como lo acaba de mencionar el señor senador Romero, en relación con las leyes impositivas, entre el Partido Justicialista y el partido radical—, hubiésemos querido participar de alguna manera en el análisis y redacción de este proyecto que vino de la Secretaría de Hacienda y nació de contactos con representantes del Partido Justicialista.

No tuvimos esa suerte. Por eso creemos que es necesario revisarlo y analizarlo más exhaustivamente, si queremos realmente actuar con justicia y respondiendo a los intereses generales.

Mi provincia se vio afectada también por la emergencia agropecuaria; sufrimos sequías e inundaciones pero nunca recibimos los fondos específicos en este aspecto. Es así como en este momento se adeuda a Corrientes por este concepto aproximadamente 250 millones de australes. No nos oponemos a que se incremente el índice de algunas provincias, sobre todo las patagónicas, que bien lo merecen, pero no creemos conveniente que se perjudique a otras, en este caso la nuestra, cuando el ingreso per cápita de nuestro pueblo es de mil dólares anuales y por ejemplo —sin querer oponerme al incremento que pueda tener— la provincia de Buenos Aires tiene más de cuatro mil dólares anuales de ingreso per cápita.

Entendemos que es necesario que la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal o cuasifiscal, cuando sea superior al crecimiento de la economía, su diferencia sea coparticipable, ya que es un impuesto indirecto.

No quiero extenderme en otro tipo de consideraciones. Estimo fundamental que no sigamos legislando de esta manera, sin que los bloques minoritarios sean consultados en la medida que las circunstancias requieren. Somos conscientes de la necesidad de una ley de coparticipación. Estamos totalmente convencidos de que tiene que terminar ese peregrinar de los gobernadores, a veces, ante funcionarios de tercera categoría o que ni siquiera sean atendidos, cuando

van a solicitar lo que legítimamente les corresponde a sus provincias.

Es necesaria la vigencia del federalismo; que todos aportemos nuestro esfuerzo y nuestra dedicación para tener un país mejor proporcionado.

Teniendo en cuenta que no fuimos consultados y que no participamos en absoluto en la redacción de este acuerdo transitorio entre la Nación y las provincias en materia de recursos fiscales, solicito que este proyecto de ley pase a comisión para que sea analizado como corresponde. Si esto no fuera así, señor presidente, los integrantes del Pacto Autonomista Liberal nos vamos a ver obligados a votar en contra de esta iniciativa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente, señores senadores: todos los legisladores teníamos conciencia de que era muy importante lograr acuerdos fundamentales para que este Congreso pudiera dictar dos leyes que afectaban especialmente a todo el país: en primer lugar, me refiero a la de coparticipación federal de impuestos y, en segundo término, a la de promoción industrial.

Pero también los legisladores asumíamos como una realidad las enormes dificultades que enfrentábamos para poder armonizar los intereses encontrados que había no sólo entre la Nación y las provincias sino también entre estas últimas.

Por eso, señor presidente, pese a las críticas que se le pueden hacer —y que yo mismo formularé—, creo que no podemos dejar de estar satisfechos cuando hoy tratamos la primera de esas dos importantes iniciativas que mencioné, resolviendo así, al menos, uno de estos problemas fundamentales que el Parlamento viene trayendo de arrastre.

Por supuesto que no podremos decir, al cabo de este debate, que todos saldremos satisfechos con el texto que tenemos bajo examen y que, en definitiva, creo que aprobaremos como ley, habiendo sido sancionado ya por la Cámara de Diputados. Pero al menos, como decía, hemos logrado coincidencias mínimas para poder reglamentar un régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias; también hemos logrado coincidencias para establecer las obligaciones emergentes de la ley y para poder reactivar la vigencia de la Comisión Federal de Impuestos, un organismo con tradición que había quedado prácticamente disuelto al vencer la ley 20.221.

Hay un punto que, como senador y en consecuencia representante de provincia que soy,

considero muy favorable y deseo destacarlo especialmente porque además de pensarlo así he visto que en el interesante y valioso análisis hecho por el señor senador por Corrientes no se le ha dado la importancia debida. Me refiero al hecho de que en la presente ley se disminuye el porcentaje de distribución de impuestos que le corresponde a la Nación, con el consiguiente aumento del porcentaje destinado a las provincias.

Recuerdo, señor presidente, cuando tratamos en este Senado el último presupuesto; recién me había incorporado al cuerpo y ya en aquel entonces señalé mi aspiración de que una futura ley de coparticipación federal de impuestos —para lo que estimaba debían ser los puntos fundamentales— exigiera un mayor porcentaje de distribución a las provincias respecto de lo que recibía la Nación, rompiendo el equilibrio existente hasta ese entonces.

Sr. Romero Feris. — ¿Me permite una pequeña interrupción?

Sr. Solari Yrigoyen. — Con todo gusto.

Sr. Romero Feris. — Como el señor senador se refiere a la distribución entre la Nación y las provincias, yo omití en mi exposición un dato que creo es importante y fundamental: la Nación percibe el 72 por ciento del total de la renta y las provincias el 28 por ciento restante. Es decir, si tomamos el total de los recursos que ingresan y no solamente los coparticipables, esa es la cifra real de distribución que existe entre la Nación y las provincias. Como creo que es un dato muy valioso si realmente queremos buscar el equilibrio, he querido hacer este aporte a esta altura del debate, por lo que agradezco al señor senador el haberme permitido la interrupción.

Sr. Solari Yrigoyen. — Agradezco al señor senador su intervención, pero me viene a la memoria aquella célebre frase de Disraeli, en el sentido de que hay pequeñas mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Precisamente, las estadísticas que yo voy a brindar muestran lo contrario a lo que sostiene el señor senador por Corrientes; es decir, este proyecto de ley tiene un neto corte federalista que viene a favorecer a las provincias. Esto ya lo mencionó el miembro informante, senador por la Capital Federal, perteneciente a mi bloque.

Además de romperse ese equilibrio distributivo entre la Nación y las provincias a favor de estas últimas, se ha aumentado la base imponible de los tributos coparticipables, como es el caso, por ejemplo, de los combustibles, al que se refiere el artículo 2º *in fine* del proyecto que tenemos bajo examen.

La comparación del texto actual del proyecto con la ley 20.221 nos permite sacar varias conclusiones. La vieja ley le daba a la Nación un porcentaje del 48,5 y nuestro proyecto lo reduce al 42,34 por ciento. La antigua ley, a su vez, le daba a las provincias el 48,5 y el actual proyecto les otorga el 54,66 por ciento. Las diferencias están dadas en que la ley 20.221 creaba el Fondo de Desarrollo Regional al que dedicaba el 3 por ciento y, en cambio, en este proyecto no se contempla dicho fondo; a esto me referiré más adelante. Por el contrario, esta iniciativa establece un recupero para cuatro provincias —Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz— equivalente a un 2 por ciento y determina que el 1 por ciento restante será para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, con lo que se completa el ciento por ciento distribuable.

Es cierto que el Fondo de Desarrollo Regional ha sido un organismo útil para la ejecución de obras de envergadura a nivel interprovincial más que provincial. Esta entidad desaparece en el proyecto que estamos tratando, pero ese ha sido —no se puede negar— el criterio que ha prevalecido entre las provincias, sin dejar de reconocer las importantes obras que ha efectuado. Como dije, las provincias han preferido administrar por sí mismas y en forma directa los montos que podían dedicarse a dicho fondo; ese es el motivo por el cual desaparece.

Pero de todas maneras, no podemos dejar de tener en cuenta que este proyecto de ley prevé que todas las obras de ese fondo que se encuentran autorizadas, licitadas, en proceso de licitación, contratadas o en ejecución hasta el 31 de diciembre de 1987, habrán de ser continuadas y finalizadas sin aportes de las provincias, con cargo directo al presupuesto nacional, el que, obviamente, deberá asignar las partidas necesarias para que se cumpla con dicho recaudo.

Con el incremento del porcentaje de distribución a las provincias, este proyecto de ley tiende a afianzar el sistema federal de nuestra Constitución; esto es una realidad. Todos sabemos que el federalismo político se deteriora si las provincias no tienen los fondos suficientes para garantizar su autonomía.

Así lo ha comprendido el gobierno constitucional que preside el doctor Raúl Alfonsín. Por eso es que se ha hecho una cesión expresa de una parte del porcentaje de distribución que correspondía a la Nación, que ahora pasa a las provincias. Dicho de otra manera, el gobierno nacional en definitiva ha reconocido los derechos de los estados federados.

Si hay algo que se debe predicar con el ejemplo, es el federalismo. Nosotros hemos visto muchas dictaduras militares que hablaban del federalismo, y sin embargo fueron los gobiernos más unitarios que ha tenido el país, que manejaban a los funcionarios de hasta los más apartados pueblos de provincia con timbre, desde los ministerios o desde la Casa Rosada.

Este gobierno ha respetado el federalismo. No sólo no ha intervenido ninguna provincia sino que tampoco ha tenido conflictos con ninguna de ellas, pese a que la mayoría ha estado y está gobernada por partidos de la oposición, como es el caso de las dos provincias de los senadores que me precedieron en el uso de la palabra, el senador Romero Feris, de Corrientes, y el senador Romero, de Salta. Pienso que ahora, con esta reversión del equilibrio en favor de los estados provinciales, el gobierno constitucional agrega un timbre de honor a un federalismo que viene practicando con convicción desde el primer día de su mandato.

Además, señor presidente, los derechos provinciales tienen una seria garantía con la transferencia automática y diaria que hará el Banco de la Nación Argentina, sin cobrar ninguna comisión o beneficio por este servicio.

Es cierto que esta norma no es nueva, ya que tiene como antecedente la ley 20.221. Pero el proyecto de ley que estamos considerando simplifica mucho el trámite y ha impuesto la transferencia automática, lo cual también implica un beneficio que tiende a afianzar los derechos de las provincias.

Asimismo, existe otra innovación de este proyecto sobre la ley anterior que vengo citando, que constituye una verdadera garantía para lograr la eficiencia recaudadora de la Nación de lo que, en definitiva, les corresponde a las provincias. Y esa garantía está dada por el artículo 7º del proyecto que analizamos, que establece que el monto a distribuir entre las provincias nunca será inferior al 34 por ciento de la recaudación de los recursos tributarios de la administración central, tengan o no el carácter de distribuíbles por el texto que venimos considerando. En consecuencia, con esta garantía se evitará que la Nación ponga una mayor dedicación para recaudar sus recursos no participables, lo que, en definitiva, perjudicaría a las provincias.

Además de la garantía expresa que da el artículo 7º para las provincias, el artículo 20 del proyecto en examen establece un procedimiento especial. La distribución de impuestos se basa en una norma general que tampoco existía en la ley 20.221, que es muy clara; y lo dice expre-

samente el texto del artículo 2º: la coparticipación comprende a todos los impuestos.

Es cierto que tal norma tiene algunas excepciones que la ley determina con claridad en este artículo, pero estas excepciones se han definido también con un criterio federalista, como lo prueban estos dos ejemplos: en primer lugar, no entran en la coparticipación los impuestos que tienen una afectación específica; pero si, cumplido el objeto, estos gravámenes continuaran vigentes, también se afectarían al reparto de la coparticipación federal.

Por otra parte, tampoco entran en la coparticipación federal los impuestos y las contribuciones nacionales que se afecten a obras y actividades que se declaren de interés nacional; pero dicha afectación debe hacerse por una ley del Congreso en cuya sanción todos tendremos que intervenir y, además, necesita la adhesión de las legislaturas de todas las provincias y el plazo debe estar limitado. Por otra parte, si vencido el plazo los impuestos subsistieran, se afectarían asimismo al sistema de distribución que contempla el proyecto de ley que estamos debatiendo.

Estos dos ejemplos son casos típicos de la afirmación federal y del interés que tiene esta ley de limitar las excepciones y de que se cumpla la norma general de que la coparticipación comprenda a todos los impuestos.

Las situaciones de emergencia y desequilibrio serán atendidas por el Fondo de Aportes del Tesoro nacional que se crea por esta norma legal, el que será manejado por el Ministerio del Interior. Creo que sobre este aspecto no existirán objeciones de las provincias porque en general éstas tienen un manejo más fácil y directo con aquel ministerio que con el de Economía. Pero el Ministerio del Interior no puede repartir estos fondos a su antojo; tiene la obligación de informar trimestralmente a las provincias sobre la distribución que ha efectuado, indicándoles también en el informe los criterios seguidos para la asignación de esos fondos de aportes del Tesoro nacional.

Vale decir que el control de las provincias será el mejor seguro para la transparencia que debe tener el manejo del fondo a que se refiere el artículo 5º de este proyecto de ley que estamos examinando.

El proyecto también es claro en el deslinde entre los impuestos nacionales coparticipables y los tributos que tienen derecho a imponer las provincias, por supuesto evitando la doble imposición.

Considero un hecho positivo del proyecto de ley que se obligue a las provincias —según el inciso g) del artículo 9º— a que en cada caso

la ley de adhesión a la ley nacional de coparticipación federal que deberá dictar cada estado federal, establezca un sistema de distribución para los municipios que asegure la fijación objetiva de los índices de distribución, y lo que es más importante, la remisión quincenal y automática de los fondos.

El plazo que introduce este proyecto no lo tenía la ley 20.221, de manera que es un importante avance en el camino del afianzamiento de las autonomías municipales. Los municipios son la base sobre la que se asienta nuestro sistema federal y como tal deben ser tenidos en cuenta; el presente proyecto de ley así lo hace.

La notificación que hace la ley en examen de la Comisión Federal de Impuestos que ya había sido creada en el capítulo III de la ley 20.221, en 1973, es una medida adecuada. Pero esta ley, desgraciadamente, ratifica un privilegio en la composición de su comité ejecutivo.

El principio de igualdad entre provincias queda lesionado por el carácter de miembros permanentes que se otorga a las que superen el 9 por ciento como porcentaje de distribución. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las beneficiarias de este privilegio en desmedro de las demás provincias.

La ley 20.221 ya había creado un privilegio semejante asegurando con carácter permanente y obligatorio la integración del comité ejecutivo de ciertas provincias, pero con otro criterio.

Se le daba esa plaza permanente a aquellas provincias que superasen el 10 por ciento de la población del conjunto de los demás.

Mi criterio es contrario a este privilegio, y en nombre de la provincia que represento lo impugno expresamente.

Las amplias facultades que se le otorgan a la Comisión Federal de Impuestos contribuyen también a resguardar los derechos de las provincias, cada una de las cuales tendrá una representación uniforme de un solo delegado, igual que la Nación. Esta resulta similar a lo que ya había establecido la ley 20.221.

En el análisis de este proyecto de ley no quiero dejar de mencionar el criterio de justicia social que ha inspirado, en el capítulo de disposiciones transitorias, la creación de la Comisión para el Análisis de las Políticas de Empleo, Salarial y de Condiciones de Trabajo que, como bien lo señaló el señor senador Trilla, debe formular recomendaciones que permitan en definitiva elaborar un proyecto de ley que regule la política del empleo, las condiciones del trabajo y los salarios para los servicios que se determinan.

El plazo de remisión de este proyecto al Congreso culmina el 31 de marzo del presente año. Anhelamos verdaderamente que este plazo sea cumplido.

También son interesantes las obligaciones que la Nación y las provincias adquieren para no incrementar sus respectivas plantas de personal. Ello permitirá asegurar una mejor administración de los fondos recaudados y de los repartidos.

Esto desdice, en parte, las aseveraciones que a veces se hacen en cuanto a que no hay por parte del gobierno nacional ni de los gobiernos provinciales un verdadero deseo de disminuir el gasto público y que solamente se pone el énfasis en aumentar los ingresos. Esta norma que acabo de comentar está expresando precisamente lo contrario.

Quiero ahora hacer un análisis somero de lo que representa este proyecto de ley para la provincia del Chubut. Si se examinara su texto a la ligera, tal vez podría creerse que la la provincia del Chubut resulta beneficiada. Pero no es así. Por ello quiero manifestar mi disconformidad con este punto que afecta al Estado que represento.

De acuerdo con el porcentaje del artículo 4º de la ley, el Chubut recibe el 1,38 por ciento sobre el 54,66 por ciento que deben percibir todas las provincias. Por el artículo 3º, inciso c), mi provincia recibe como recupero del nivel relativo el 0,1433 por ciento sobre el 100 por ciento a distribuir. Esto determina que en su conjunto la participación relativa del Chubut llegue al 1,58 por ciento del total de impuestos coparticipables.

Sin duda, este porcentaje es superior al recibido por el Chubut en los últimos años.

En 1987, por ejemplo, mi provincia recibió el 1,50 por ciento del total de la coparticipación federal de impuestos más los aportes del Tesoro nacional. Pero el porcentaje total del presente proyecto de ley es muy inferior al 1,96 por ciento que recibió en 1973, con la aprobación de la ley 20.221, y al 2,15 que obtuvo en 1980. Y, aún, es inferior al promedio de 1,60 correspondiente al período 1973/86.

En otras palabras, admito que este proyecto de ley reconoce —pero sólo en parte— la caída del porcentaje experimentado por el Chubut en los últimos años.

Como legislador de esta provincia —estoy seguro de que, en este sentido, interpreto también a mi colega, el señor senador del Villar— seguiré bregando para que el Chubut recupere el promedio que le corresponde y que en su momento tuvo

Hay un punto en el que quiero detenerme para dar una explicación, ya que observé que entre las estadísticas que se consultaron para elaborar este proyecto de ley figura la del incremento de personal que han tenido las diversas provincias.

Es cierto que en el Chubut se produjo un incremento; en 1983 contábamos con 11.728 empleados y, en 1986, con 15.688, lo que representa una variación del 33,8 por ciento. Este aumento coloca a mi provincia en el sexto lugar en promedio después de Santa Cruz, La Rioja, Santa Fe, Corrientes y Formosa, y en el undécimo lugar en cuanto a variación numérica después de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Salta, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, San Luis y Tucumán.

Pero quiero dejar constancia, señor presidente, de que este incremento no ha sido hecho con el ánimo de aumentar la burocracia provincial. Es un hecho público y notorio el aumento de la población que ha tenido la provincia del Chubut. En ciudades como Puerto Madryn, de la que provengo, en pocos años se ha cuadruplicado la población. Esto obligó al gobierno provincial a hacer denodados esfuerzos para abrir decenas y decenas de escuelas y, también, para aumentar los servicios hospitalarios. Ello condujo, en su mayor parte, al incremento del porcentaje de empleados públicos que, como se ve, tiene su explicación para poder cumplir con servicios indispensables.

En estas estadísticas de personal que se analizaron para la redacción del presente proyecto observó cómo prácticamente todas las provincias aumentaron el número de empleados públicos. Y cada uno defenderá a su sector.

Debo señalar que entre las provincias más austeras se encuentran las gobernadas por la Unión Cívica Radical hasta el cambio producido en diciembre del año pasado. Pero también, para ser justo, quiero señalar un ejemplo, y lo hago ahora que nuestro colega está ausente, porque sé que no voy a herir su humildad.

Ese ejemplo está dado por la provincia de Santiago del Estero, que estuvo administrada por el entonces señor gobernador Juárez. Se trata de una provincia que, verdaderamente, no produjo un aumento de empleados públicos, ya que en los cuatro años de gobierno solamente nombró a 149 empleados, lo que implica, apenas, un incremento del 0,6 por ciento.

En definitiva, señor presidente y señores senadores, el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar afirmativamente este proyecto de ley.

Pese a las críticas que podemos hacer —yo he efectuado la del enfoque que me da mi posición como representante por el Chubut y otros señores senadores podrán hacer lo mismo con respecto a sus provincias— tenemos que reconocer que es un proyecto de neto corte federalista.

Se han hecho también en este recinto algunas observaciones en contra de este proyecto, que considero no son justas, y por eso me referiré a ellas.

Cuando venció la ley 20.221 en diciembre de 1984, no se puede culpar al Poder Ejecutivo de que no haya previsto inmediatamente la sanción de una norma, lo que en definitiva, creo, podemos hacer esta noche. Hay que recordar que el Poder Ejecutivo envió un proyecto a la Cámara de Diputados. De manera que ha sido el Parlamento, en algún modo, el que por diversos motivos ha estado en mora y sería injusto poner sobre las espaldas del Poder Ejecutivo la demora en dictar una nueva ley de coparticipación federal.

Es cierto lo que ha dicho el señor senador por Corrientes que esta es una ley que vencerá el 31 de diciembre de 1989. Pero no es menos cierto que tendrá una prórroga automática hasta que haya un régimen sustitutivo. De modo que no estamos legislando sin previsiones para el futuro.

No quisiera terminar sin recoger una muy válida y compartida aspiración del señor senador Romero, por Salta. El exaltó el acuerdo a que se ha llegado por encima de todas las dificultades a los efectos de dictar una ley fundamental como ésta. Expresó que desearía que el mismo acuerdo lo lográramos para otras leyes fundamentales y enumeró varias, entre ellas la de asociaciones sindicales. El bloque de la Unión Cívica Radical toma la palabra a esta justa aspiración que nosotros compartimos.

Más de una vez hemos dicho que por la propia composición de este cuerpo necesitamos sentarnos a una mesa para acordar y sacar leyes adelante porque ningún bloque tiene mayoría suficiente como para que pueda imponerse a otro. Así que los acuerdos están en la base esencial de la labor fructífera que pueda realizar la Cámara.

Para terminar, reitero que daremos el voto afirmativo a este proyecto de ley y que lo haremos con satisfacción, porque se trata de un texto que viene a afianzar los derechos federales que reconoce nuestra Constitución Nacional y que nuestro gobierno ha respetado desde el primer día hasta la fecha y que, estoy seguro, lo hará hasta el final de su mandato popular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — (*Lee*) “Señor presidente, señores senadores: deseo dejar sentada con absoluta claridad la posición del Partido Bloquista de San Juan, que represento, y del gobierno de mi provincia frente al proyecto de ley en examen sobre coparticipación federal.

Adelanto el voto favorable, pero no obstante formulo las siguientes observaciones: ni las autoridades del gobierno provincial, ni los diputados nacionales y tampoco los senadores por San Juan hemos sido invitados a participar en las negociaciones llevadas a cabo.

Por este proyecto de ley mi provincia ha resultado perjudicada en el índice que se establece para la distribución del 54,66 por ciento que le corresponde al conjunto de las provincias adheridas a este régimen de coparticipación. Ello es así, ya que en 1985, que fue el primer año después que terminó la vigencia de la ley 20.221 de coparticipación, a San Juan le correspondió el 3,67 por ciento, índice que reivindica mi provincia. En cambio, el proyecto en tratamiento le asigna el 3,51 por ciento, índice que se reduce más aún al no participar San Juan en el 2 por ciento que se fija para otras provincias. Por dicha circunstancia, el índice de 3,51 por ciento baja a 3,38 por ciento.

Según la información brindada por la Secretaría de Hacienda de la Nación, San Juan tuvo un índice del 3,51 por ciento en 1986. Esto se debió a que a partir de ese año se incluyeron, en el acuerdo entre la Nación y las provincias, los ajustes de política salarial.

Esto determinó que nuestra provincia, que mantuvo una política de adhesión a la nacional en materia salarial, y una política prudente en materia ocupacional, se viera perjudicada en el índice de su participación al disminuir éste en relación al del año 1985.

Asimismo, señor presidente y señores senadores, el proyecto contempla la eliminación del Fondo de Desarrollo Regional, por el que mi provincia, igual que otras con menor grado de desarrollo que el resto del país, financia obras públicas. En el caso de San Juan se está llevando a cabo la obra Usina Hidroeléctrica de Pie de Presa Dique de Ullum. En reemplazo de este fondo el Estado nacional se hará cargo, a través de la ley de Presupuesto General de la Nación, de su financiación; pero creo conveniente que se determine específicamente cuáles son las obras en ejecución y su nivel de financiamiento, que quedarán a cargo del Estado nacional a través del Presupuesto General de la Nación.

Es importante dejar constancia de que a esta fecha existe una deuda importante con empresas contratistas de la obra mencionada anteriormente, y de la cual la Nación se deberá hacer cargo, así como también de la terminación de la obra a través del financiamiento total.

Quiero reiterar mi posición. Más allá de las razones que me impulsaron a mantener las negociaciones aludidas, debemos tener en cuenta que todas las provincias son iguales y, si bien deben diferenciarse en cuanto a la participación que cada una de ellas debe tener en el sistema de coparticipación, no debe ocurrir lo mismo con respecto a las negociaciones. Todas las provincias deberían haber sido tenidas en cuenta en el momento de esas conversaciones.

El país acaba de asistir a una experiencia, como la de la Mesa del Consenso Democrático; en ella estamos representados todos los partidos políticos con representación gubernamental y parlamentaria, entre los cuales están los partidos provinciales como el Movimiento Popular Neuquino, el Pacto Autonomista Liberal y el Bloquismo. De igual forma debieron participar en las negociaciones que atañen a un derecho de las provincias como es el de coparticipar en la distribución de los recursos que todos contribuyen a formar.

Finalmente, no habiendo contado con la anticipación suficiente para realizar un análisis más detenido antes de su sanción por la Cámara de Diputados, y hoy, por el apremio que tienen las finanzas públicas para contar con esta ley, seguramente su texto es pasible de observaciones y modificaciones que deberemos tener presentes para la futura ley sobre la materia.

En 1986, en el Honorable Senado, el entonces senador Carlos Gómez Centurión y el senador Francisco Gil presentaron un proyecto de ley sobre esta misma materia. En él está sustentada toda la doctrina que ha inspirado las sucesivas normas sobre coparticipación.

Por ello, San Juan reivindica dicho proyecto en este acto."

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Vidal. — (Lee) "Señor presidente: llega hoy a este recinto el demorado proyecto de ley de coparticipación federal, luego de cuatro años de recuperadas las instituciones y después de tres años de vencido el anterior régimen. De tal manera, viene a llamarse tardíamente un vacío que había dejado la regulación de las relaciones financieras entre las provincias y la Nación, librada al albur de negociaciones que violentaron las autonomías federales y obligaron a los go-

bernadores y ministros de Economía de las provincias a reiteradas peregrinaciones a Buenos Aires.

Adelanto desde ya mi voto favorable a la iniciativa en consideración, pues supone regularizar una circunstancia evidentemente anómala, que afectaba el funcionamiento institucional y subordinaba a las provincias a las concesiones del poder central.

El régimen de coparticipación federal es uno de los pilares de la integración nacional, pues asegura la existencia de un sistema impositivo único en todo el territorio de la Nación e implica el consenso solidario entre el Estado nacional y las provincias que concurren a su conformación.

Lamentablemente, el tratamiento previo de esta cuestión no ha estado rodeado del clima de elevado debate que requiere su importancia y jerarquía. Lejos de eso, todos quienes nos sentamos en estas bancas sabemos que hubo presiones para "enganchar" la sanción de esta ley con la aprobación del paquete impositivo que fuera sancionado por la Cámara de Diputados; presiones que —es justo que lo digamos— tuvieron como telón de fondo la angustiosa situación financiera de la totalidad de los erarios provinciales.

Se incurre así en un flagrante contrasentido. Por un lado, vamos a votar una ley largamente reclamada por las provincias y que —en cierta medida— da satisfacción a algunos de sus reclamos, ya que otros quedan pendientes, como es el caso de algunas provincias del litoral mencionadas por el señor senador representante de Corrientes. Por el otro lado, se va a consagrar un conjunto de medidas fiscales que implican una nueva vuelta de tuerca en la aplicación de una política recesiva cuyas consecuencias se proyectan negativamente sobre el conjunto de la Nación y por ende sobre las finanzas de las provincias.

Señor presidente: este régimen de coparticipación es una herramienta del sistema de las finanzas públicas, pero de manera alguna una solución. Por más que se introduzcan algunas mejoras en la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias, y con reclamos en algunas de ellas por la distribución secundaria, no habrá solución real en la medida en que se mantenga el desaliento a la producción. Quienes venimos de las provincias empobrecidas y de su interior profundo, conocemos el drama en nuestra dolorosa experiencia. Con las economías regionales quebradas no hay base tributaria para la recaudación de los impuestos y tasas específicamente provinciales y municipales; la desocu-

pación, por su parte, empuja cada vez más brazos hacia la administración pública y las actividades terciarias de escasa productividad y nula significación tributaria. Como consecuencia de todo ello, las finanzas provinciales son cada vez más raquíticas; los fondos de inversión se esfuman y el simple pago de los sueldos a los agentes de la administración se convierte en un drama mensualmente renovado. En ese marco de dependencia económica, el federalismo es letra muerta, mientras se profundiza el subdesarrollo con todas sus secuelas sociales y culturales.

Las provincias argentinas necesitan un régimen de coparticipación que con el tiempo podrá ser mejorado. Bienvenido sea él. Pero necesitan mucho más. Necesitan una política económica apoyada en la promoción del mercado interno y lanzada a la movilización de todas las riquezas del territorio nacional. Mientras ello no ocurre, serán vanos los sucedáneos y estériles los remiendos. Para romper la estructura colonial que dio lugar al centralismo portuario, hace falta una audaz política de desarrollo nacional.

Los modelos monetaristas al estilo del actualmente vigente y las especulaciones acerca de nuevas especializaciones exportadoras, lo único que lograrán es acentuar aún más el drama de la marginación del interior y la crisis de las finanzas provinciales. Por eso, a la hora de fundar mi voto no puedo dejar de reiterar —como lo hago cada vez que me toca intervenir en este recinto en debates relacionados con cuestiones económicas— el permanente reclamo del desarrollismo por la modificación global del esquema vigente. Es un clamor que compartimos con el conjunto de los sectores sociales y con la totalidad de las provincias argentinas.”

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a ser muy breve en mi exposición por cuanto los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, especialmente los miembros informantes, se han explayado minuciosamente respecto de las pautas que se han tenido en cuenta para la confección y formulación de esta ansiada ley de coparticipación federal de impuestos, tan esperada por las provincias y tan postergadas en su tratamiento.

No voy, entonces, a repetir esos conceptos ni tampoco a encuadrarlos en lo que hace a los aspectos técnicos. Sí quiero decir que con esta ley se logra, indudablemente, un viejo anhelo de las provincias en lo que hace a determinar orgánicamente la coparticipación federal que les

corresponde por la recaudación impositiva; en eso, desde luego, este proyecto de ley es positivo. Pero también quiero señalar, como representante de la provincia de La Rioja, que no estamos de acuerdo con respecto a la distribución secundaria que se realiza en esta iniciativa.

Debemos dejar establecido que el índice que se le asigna a la provincia de La Rioja por medio de este proyecto de ley es inferior al que entendemos tiene derecho, razón por la cual lo dejamos expresamente aclarado, aunque no deseamos obstaculizar su sanción porque entendemos necesario que hoy así resulte para dotar a la Nación de un instrumento que sea idóneo y permita manejar un tema que ha venido siendo tratado discrecionalmente y, en algunos casos, hasta con cierta arbitrariedad.

Pero al mismo tiempo no puedo dejar de señalar la situación de inferioridad en que se está colocando a mi provincia, situación que no es nueva ya que en el mencionado acuerdo transitorio que se había logrado entre la Nación y las provincias en 1986 se puso a La Rioja en un plano de inferioridad. Fue así cuando, al reconocer esa realidad de mi provincia, se decidió compensarle las diferencias con aportes del Tesoro nacional que le permitían cubrir, si bien no totalmente, todos los gastos, y así por lo menos paliar en algo el déficit al cual se la había sometido en razón de ese tratamiento fiscal, pues se le había fijado un índice que era inferior al que históricamente le correspondía.

Así llegamos, señor presidente, a la sanción de esta ley que nosotros habíamos esperado larga y ansiosamente porque en ocasión de celebrarse aquel acuerdo financiero, que para mi provincia no había sido favorable, se nos prometió que la cuestión iba a ser solucionada en ocasión de sancionarse una ley definitiva de coparticipación federal. Hoy estamos ante esa oportunidad, pero resulta que, lejos de solucionarse esta situación, se ve agravada toda vez que prácticamente se institucionaliza ese trato desigual y desfavorable que sufre mi provincia como consecuencia del establecimiento de un índice que no es de manera alguna justo ni sirve para atender a sus necesidades más elementales.

Como dato ilustrativo, y para reflejar que esto se ajusta a la realidad, puedo señalar que, por ejemplo, de acuerdo con lo establecido por la ley 20.221, La Rioja tenía asignado un índice que era sólo inferior en un 0,20 por ciento al de la provincia de Catamarca.

La provincia de Catamarca en ese acuerdo de 1973, tenía el 1,9272 por ciento y La Rioja,

el 1,7233, o sea, como dije, un índice inferior sólo en 0,20 por ciento. De acuerdo con lo establecido en la norma que estamos considerando, esa diferencia sería de 0,60 por ciento —2,86 por ciento para Catamarca y 2,15 por ciento para La Rioja—. Y esto no es precisamente porque se haya mejorado la situación de la provincia de Catamarca; por el contrario, estimamos que no queda para nada en una situación óptima. Pero lo cierto es que aun mucho peor queda mi provincia si se hace una relación comparativa con la que tenía respecto de Catamarca.

Vale la pena señalar que estoy mencionando casos de provincias que tienen situaciones similares a la de La Rioja en lo que hace a su desarrollo y condiciones de vida.

Tomemos el caso de San Luis, que es otra provincia integrante del Acta de Reparación Histórica. La diferencia de 1973 era más estrecha aun, por cuanto los porcentajes respectivos eran 1,75 y 1,72, habiéndose estirado en 0,12 por ciento, o sea de 2,37 para San Luis a 2,15 para La Rioja.

Con Formosa las diferencias son mayores, ya que se pasa del 0,56 por ciento al 1,63 por ciento.

Por supuesto, estos ejemplos podrían multiplicarse, pero bastan para reflejar que aun respecto de provincias que no recibieron precisamente un trato favorecido —como seguramente lo señalarán los colegas representantes de las mismas— La Rioja ha sufrido un empeoramiento de su situación. Esto, por supuesto, no puedo callarlo, y debo dejarlo perfectamente sentado en este momento, y a todos los efectos en el tratamiento que puedan tener otras normas así como el manejo de otros recursos con respecto a las provincias.

Señor presidente: se trata de un proyecto de ley de tanta trascendencia, tanto para las provincias como para la Nación, en lo que hace a la distribución de recursos, que en estos momentos dejo formalmente notificado al cuerpo, a todos los efectos, que la provincia de La Rioja, con este índice asignado del 2,15 por ciento, queda condenada a no poder atender sus necesidades más elementales, esto es, a un permanente déficit financiero y a un estado de emergencia. Quiero dejar perfectamente establecido esto en este recinto para que el día de mañana no se nos diga que no hicimos los reclamos correspondientes en el momento oportuno.

Desde luego, éste es un aspecto parcial de la cuestión relativa a la distribución de los

recursos. Digo esto porque al momento de establecerse la justicia de la distribución de los recursos nacionales y provinciales no sólo debemos tener en cuenta el hecho de la distribución de los fondos, ya que ésta se hace también a otros niveles y respecto de los distintos parámetros.

¿Qué decir, por ejemplo, señor presidente, con respecto al tema de lo que invierten las empresas del Estado en las distintas jurisdicciones?

Cuando se trata de distribución de recursos —como en este caso de la ley de coparticipación federal— se tiene muy en cuenta los porcentajes. Se habla de la cantidad de población, a este respecto quiero decir que los índices que se han tomado en cuenta tradicionalmente, no son de ninguna manera justos.

Por ejemplo, según mi criterio, se le asigna un valor excesivo al elemento poblacional y no se valora debidamente a otros, tal el caso de la brecha de desarrollo. En la brecha de desarrollo, que es otro parámetro, habría que calibrar mejor algunos elementos que se tienen en cuenta, por ejemplo, el de calidad de vivienda. Se considera la calidad de vivienda en las distintas provincias, pero no se tiene en cuenta que, por ejemplo, en algunas provincias como San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis que están en onzas sísmicas, la calidad de la vivienda necesariamente se tiene que hacer con un nivel de construcción superior, no por razones de lujo sino de seguridad porque así lo obligan las normas de construcción en esas zonas.

Lo mismo ocurre en cuanto a la cantidad de automóviles por habitante. Se lo mide así, a secas, sin tener en cuenta los mayores o menores servicios de transporte que existen en las distintas jurisdicciones y que pueden hacer menos imperiosa la necesidad de disponer de automóvil.

Por otra parte, hay otras pautas que no se tienen en cuenta y vuelvo al tema de lo que invierten las empresas públicas en las distintas jurisdicciones. Si tenemos que tener en cuenta las obras públicas que se realizan en las distintas jurisdicciones, puedo decir que en mi provincia la Nación nunca ha encarado obras públicas de gran magnitud. Podemos citar los grandes diques, los pasos cordilleranos o las grandes autopistas que se han hecho en otras provincias, pero en la mía nunca se han realizado obras de esta magnitud, no obstante que en el esfuerzo para hacer esas obras públicas colaboramos todos los habitantes del país.

Tampoco es justo lo que está acurriendo con el gasto de las empresas del Estado en las distintas jurisdicciones. Sin ir más lejos, podemos citar el caso de la empresa Ferrocarriles Argentinos, que opera con un déficit de aproximadamente unos mil millones de dólares anuales, déficit con el que colaboran todos los argentinos, pero resulta que en mi provincia hace más de diez años que no existe un servicio regular de trenes.

En el momento de hacer las contribuciones, colaboramos todos, pues tenemos que solventar ese déficit y se pone de manifiesto otro aspecto más de esta injusta distribución de recursos y de cargas que se hace entre las distintas jurisdicciones del país, cuando en mi provincia va un tren carguero —con suerte— una vez por semana. No obstante, el déficit lo tenemos que solventar todos los argentinos.

Recuerdo también lo que ocurre con otras empresas del Estado. Por ejemplo, cuando nos referimos a la provisión de energía eléctrica, por lo menos hasta hace un tiempo al efectuar el pago se nos imponía un recargo para contribuir a la obra El Chocón-Cerros Colorados, lo que me parece bien porque es una obra necesaria para el país. Pero resulta que de esa obra no se benefició ni nunca se beneficiará mi provincia; sin embargo, nosotros pagábamos de nuestro bolsillo la contribución para esa importante obra.

A la hora de contribuir se nos tiene en cuenta; a la hora de repartir no se nos considera. Y ello con este agravante: mi provincia, por razones de su desfavorable condición geográfica, no tiene cursos de agua superficiales ni grandes diques y no posee el agua suficiente para hacer regadío de superficie. Con gran esfuerzo tenemos que sacar el agua del subsuelo para poder cultivar nuestra tierra, y esa energía que nosotros necesitamos, no para iluminación sino para hacer producir el suelo, para que nuestros agricultores puedan trabajar. La estamos pagando al mismo precio que abona el ciudadano que vive en un centro importante y que la usa para su confort. Vale lo mismo la energía en la provincia de La Rioja para hacer producir la tierra que la que usa un ciudadano de la Capital Federal para su acondicionador de aire, con la finalidad de un mayor confort.

Esta es otra de las injusticias que también debe ser tenida en cuenta en el momento de establecer contribuciones y de repartir los recursos de este país, que en definitiva salen todos del mismo bolsillo y deberían tener un tra-

Por todas estas razones, señor presidente, valoramos la importancia que tiene este proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos, pero con una salvedad; vamos a votar este proyecto porque entendemos que es necesario para el país, a fin de ordenar el reparto de recursos y terminar con la anarquía que existía hasta este momento en el manejo de la distribución de los recursos, pero asimismo debemos formular las siguientes reservas: no satisface en absoluto los merecimientos, los derechos y las expectativas de mi provincia. Por ello dejo sentado que este voto favorable lo voy a emitir con la condición y la esperanza que leyes futuras tengan en cuenta esta desigualdad a los efectos de equilibrar la situación en el momento de repartir otro tipo de recursos. De no ser así, esta gran brecha de desarrollo que existe entre las distintas provincias se va a ir acrecentando con el correr del tiempo.

Bajo estas condiciones anticipo mi voto favorable a este proyecto de ley.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: no voy a sumar la queja de mi provincia al desfile de quejas que se ha producido esta tarde como consecuencia de las diferencias en los porcentajes. Sólo digo que para Jujuy resulta disminuido el porcentaje que se le asigna con respecto al anterior.

El señor senador Benítez ha consultado la actitud que debíamos adoptar con relación a este proyecto de ley en vista a los intereses de nuestra provincia. El ministro de Economía le ha hecho saber su conformidad a pesar de esta diferencia. En esta conformidad va implícita la suposición de que el sistema que vamos a votar ahora presenta ventajas importantes con relación al que hasta este momento se ha estado aplicando. Le otorga legalidad a una situación totalmente ilegal. Los gobernadores de provincia junto con el presidente de la República, después de concluida la vigencia de la ley del Proceso, habían llegado a una forma de distribución de sumas que se consideraban concretas y que debían haber sido siempre aportadas por el Estado nacional.

Para aclarar algunas formas de expresión que se han vertido en el debate, quiero dejar bien establecido que no se trata de aportes que el Estado nacional reconoce a favor de las provincias en tal o cual porcentaje sino que el gobierno de la Nación coparticipa con las provincias en la distribución de los impuestos que

constitucionalmente corresponden a las provincias, así como también en el caso de algunos que les corresponden juntamente con la Nación.

De manera que cuando aquí hablamos de una coparticipación federal, no estamos recibiendo ninguna forma de contribución de la Nación hacia las provincias sino que se trata del reconocimiento de lo que justicieramente supone para ellas un régimen institucional.

La referencia histórica que ha hecho el señor senador Trilla deja perfectamente aclarado que estos impuestos, que eran percibidos anteriormente por las provincias y distribuidos por ellas según sus necesidades atendiendo a una razón de interés general, había sido objeto de esta tratativa de coparticipación.

En síntesis, nosotros estamos satisfechos de que tengamos ahora un régimen legal y que éste tenga alguna otra ventaja, como la de que los fondos serán distribuidos y asignados directamente por el Banco de la Nación a las provincias sin que ellas estén supeditadas al discrecionalismo con que se ha manejado en muchas oportunidades este asunto de la distribución de los recursos que pertenecen y corresponden a las provincias.

Dejo establecido en ese sentido que aunque pareciera que al principio voy a hablar de lo último que debía tratar, este proyecto de ley ha sido comunicado por nota del 22 de diciembre, que tuvo entrada el 28 de diciembre según el sello fechador del Senado de la Nación, y que el artículo 1º establece que rige a partir de enero de 1988. Interesa mucho que quede establecido como interpretación auténtica de este Senado, al tiempo que el proyecto de ley sea votado, que el lapso transcurrido desde el 1º de enero hasta el momento de la efectiva aplicación debe ser asumido por el gobierno federal, girando lo que corresponde a las provincias por las prestaciones que se hayan hecho efectivas en el referido período.

Deseo manifestar que las recaudaciones correspondientes a este lapso caerán bajo el sistema anterior, que es ilegítimo y que va a quedar superado por el texto del proyecto de la ley, por voluntad de los legisladores.

Con el voto favorable que prestaremos a estas normas se abre, en realidad, un nuevo crédito de confianza al gobierno de la Nación, a pesar de algunos incumplimientos en que incurrió anteriormente.

Se dijo aquí que el gobierno del doctor Alfonsín ha mantenido un respeto absoluto por el federalismo y que con todo honor ha dado

cumplimiento a sus obligaciones con las provincias.

Lamento tener que decir que esto no ha sido así históricamente. Me permito reiterar una referencia que hicimos en anteriores oportunidades acerca del compromiso personal y directo que el presidente de la República había tomado con los gobernadores de todas las provincias argentinas de asignar una partida de 500 millones de australes para cubrir valuaciones que se estimaron en el anterior acuerdo transitorio.

Sin embargo, tanto el ministro de Economía como el secretario de Hacienda, olímpicamente —cuando hicimos los reclamos para que ello se cumpliera—, dijeron que eso no se podía cumplir.

Creemos que la nueva redacción de este proyecto, y sobre todo el espíritu que reinó para que se haya producido un consenso entre los partidos mayoritarios —y deploro la situación planteada por los señores senadores por Corrientes y San Juan, y acerca de lo que yo tenía entendido era un acuerdo de gobernadores y ministros de Economía que largamente discutieron el tema— hicieron posible esta forma de conciliación de los intereses provinciales, con miras a una superior conveniencia de que los impuestos se recauden y se distribuyan según pautas que sean aproximadamente justas, por lo menos.

Esa confianza que nosotros depositamos con la sanción de este proyecto de ley, no debe ser afectada por la situación que actualmente domina el espectro de la recaudación de impuestos.

Está dicho que existe una enorme evasión, y yo digo que si las recaudaciones no son afanosamente dirigidas para obtener el mayor beneficio, estaremos discutiendo inútilmente sobre la participación de cada provincia en el total recaudado.

Ocurre que la evasión termina con el mejor de los propósitos y, en definitiva, la suma a distribuir será magra si se sigue evadiendo impuestos y será óptima si se arbitran los medios administrativos para que la evasión deje de ser el cáncer que está afectando en este momento a los recursos del Tesoro.

Por mi provincia debo dejar expuesta una manifestación, que es reiterativa, puesto que la expuse en el Senado en anterior oportunidad. Jujuy ha estimado, de acuerdo con informes documentados que ha producido su contaduría general, la deuda que el Estado nacional tiene con dicha provincia a raíz de situaciones diversas.

Esto dio motivo para que, juntamente con el señor senador Benítez, presentáramos un proyecto de resolución a fin de que se requiera del Poder Ejecutivo que haga efectivo el pago inmediato de esa deuda. Hasta ahora y, por las circunstancias que todos conocemos acerca de este período de sesiones que está transcurriendo, no hemos tenido dictamen, no pudiendo tratar este tema. Pero toda vez que esto está planteado y que el artículo 17 de este proyecto de ley establece que las reclamaciones no podrán ser de tipo administrativo y solamente quedará abierto el camino judicial para los reclamos que puedan hacer las provincias por fallas en las anteriores asignaciones de los recursos comprometidos, dejo hecha expresa reserva de los derechos de mi provincia para continuar sus gestiones y eventualmente, de efectivo modo demandar a la Nación para el pago.

Hago notar que cuando presentamos este proyecto de resolución acompañamos con toda pulcritud el informe de la Contaduría General de la provincia de Jujuy, en el que se demuestra numéricamente la falencia en que ha incurrido la Secretaría de Hacienda de la República y lo que adeuda a la provincia.

No puedo dejar de hacer referencia a un decreto de que se dio cuenta en los diarios de ayer acerca de que se van a emitir bonos para las provincias. Según la referencia periodística, puesto que no ha llegado todavía información oficial al Senado, esa emisión se haría por un monto de 350 millones de australes, unos 90 millones de dólares de tipo comercial, y estaría destinada a cubrir diferencias surgidas a raíz de la aplicación de los convenios transitorios de coparticipación para 1986 y 1987.

Estimo que esta emisión de bonos es totalmente insuficiente para atender los requerimientos que las provincias argentinas tienen formulados ante el gobierno de la Nación por esas fallas de cumplimiento de los convenios anteriores. De manera que en esto anticipo el reclamo de la provincia de Jujuy cuando reciba la parte correspondiente, que no sé en qué proporciones se establecerán, para cubrir supuestamente las fallas de asignación de recursos por los anteriores sistemas.

A continuación me referiré brevemente al artículo 16 del proyecto. A pesar de que voy a votar afirmativamente, me deja una gran preocupación. Creo que este artículo viola la esencia constitucional de este proyecto ya que prevé que "si transcurridos ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente ley, alguna provincia no hubiera comu-

nicado su adhesión, se considerará que la misma no ha adherido al régimen...". Y agrega que "los fondos que le hubieran correspondido—incluidos los que deberá reintegrar por dicho período y que le hubieran sido remitidos a cuenta de su adhesión—, serán distribuidos entre las provincias adheridas en forma proporcional a sus respectivos coeficientes de participación". Continúa diciendo inclusive que "en caso de adhesiones posteriores al plazo indicado en el párrafo anterior, la participación corresponderá a partir de la fecha de recepción de la comunicación de la norma local de adhesión...".

Este es un flagrante error que se ha cometido al redactar el proyecto de ley puesto que olvida la esencia del convenio que se está consagrando como ley de la Nación, y es que de los recursos que se distribuyen no puede disponer nadie más que las provincias porque proceden de su derecho a percibirlos. De modo que se debió arbitrar algún otro medio para solucionar la situación relacionada con lo que eventualmente pudiera suceder si alguna provincia no adhiriera.

No sé si éste será el caso, pero si la provincia de Corrientes, que ha manifestado aquí por sus dos senadores su total disconformidad con este proyecto y va a votar en contra en general sus disposiciones, decidiera no adherir a la misma sería total y completamente injusto que nuestras provincias o la Nación recibieran e hicieran suyos los porcentajes que de acuerdo con el artículo de esta ley le hubieran correspondido a dicha provincia.

Pienso que se ha incurrido en un error y espero que no se produzca ninguna situación de esta naturaleza; pero que si se llegara a dar, tengamos todos la necesaria convicción constitucional para modificar esta norma y reconocer a la provincia que no adhiera un género de reparación que haga que cuente con sus propios recursos sin violar los términos de la Constitución.

Para terminar, quiero solamente hacer una mención acerca de una referencia que se ha hecho en el debate; de que la demora no es del Poder Ejecutivo sino del Poder Legislativo. Incidentalmente, al pasar, el señor senador por el Chubut ha puesto de manifiesto que somos los responsables de que recién ahora, después de cuatro años, estemos sancionando esta ley.

Creo que se trata de un error de apreciación. Efectivamente, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto, pero no debemos olvidar que en esa Cámara el bloque mayoritario es el de la Unión Cívica Radical; y

si bien es cierto que no tiene quórum ni posibilidad de decisión propia, también es verdad que domina en las comisiones específicas que deben tratar estos temas. Y no hemos conseguido, a pesar de todos nuestros embates durante todo este tiempo que estamos en el Senado de la Nación, que esto se desbloqueara en la Cámara de Diputados y pudiéramos tratar esta ley como lo estamos haciendo hoy.

De todas maneras, es una referencia incidental que deja en claro que no es el Senado de la Nación el responsable de esta demora puesto que los senadores que somos los que representamos específicamente a las provincias, hemos sido los más atentos, insistentes y decididos emprendedores para que tengamos la oportunidad, que ahora estamos concretando, de tratar esta ley y de aprobarla, para bien de nuestras provincias y de toda la Nación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: el debate de este proyecto nos está poniendo de manifiesto que cada día el país es más federal, lo cual es importante. Cada día que pasa, las instituciones se van consolidando y, con ello, los principios constitucionales empiezan a materializarse como hechos concretos. En ese sentido, como hombre del interior, representante de una provincia chica, me siento orgulloso.

Bien se dijo en varias oportunidades que se ha producido un importante avance en la distribución de los fondos coparticipables, lo que me alegra. De aquel 48,5 por ciento del año 1973 al 42,34 por ciento al que ha retrocedido la Nación a través de este proyecto y al 54,66 por ciento al que han avanzado las provincias, creo que hay números que son de por sí elocuentes.

Pero no diríamos toda la verdad si pensáramos que con esta ley de coparticipación nos quedamos absolutamente tranquilos y el federalismo económico queda concretado en una realidad. Los impuestos coparticipables constituyen una gran parte importante, pero una sola de las que atañen a la relación económica y financiera entre la Nación y las provincias. Hay muchas otras que tienen gran importancia y que a lo mejor no las hemos analizado debidamente y que permiten, fundamentalmente a través del gasto público nacional, hacer una asignación desde el poder central a las provincias, que puede llegar a perjudicarlas o a beneficiarlas de acuerdo al criterio que se utilice.

A través del gasto público nacional se realizan obras públicas en nuestras provincias: se hacen escuelas, caminos, grandes centrales hi-

droeléctricas, y se preparan planes de desarrollo, de investigación y de fomento. A través de la asignación de estos recursos, el poder central puede llegar a crear una situación que no condiga con los presupuestos o porcentuales que estamos fijando a través de esta ley.

No es necesario que esto sea automático.

Creo que sería importante que en la próxima ley de presupuesto el Poder Ejecutivo envíe, en un anexo, por jurisdicción, por provincia, el prorratio del gasto público nacional.

Queremos saber cuánto se gasta en cada provincia en el orden nacional y que, además, en forma trimestral se nos haga conocer el presupuesto ejecutado de este gasto público nacional. Porque nos estamos peleando acá por un centésimo o un décimo más de coparticipación y, a lo mejor, estamos dejando pasar, sin ponernos a analizar debidamente, otros rubros que realmente son muy importantes.

Se habló en estos días de que se van a licitar proyectos con el sistema de capitalización de deuda. Tengo mis serios reparos personales frente al tema de la capitalización de la deuda externa, pero no es el momento de hacer el planteo, sino simplemente de traer el tema a este debate sobre la coparticipación.

Quisiera saber adónde van a ir los eventuales proyectos que se van a realizar con este tipo de subsidio que significa la capitalización de la deuda externa. ¿Van a ir a nuestras provincias? ¿Van a desarrollar las economías regionales? ¿O favorecerán los grandes emprendimientos financieros, industriales de la región central del país, de la región metropolitana, de las regiones portuarias, del Litoral? Yo sospecho que sí. Estamos hablando de cifras del orden de los 600 millones de dólares anuales, por lo menos en una primera serie. Por eso sería interesante que cuando hagamos el debate, el análisis del presupuesto, pongamos todos estos temas sobre la mesa.

Quiero también saber quiénes son los beneficiarios del déficit de algunas empresas del Estado. Sabemos que muchos de ellos son los consumidores de los grandes centros poblados; que el déficit de Ferrocarriles está provocado en gran parte por el transporte urbano —en mi provincia no hay, como en la mayor parte de las aquí representadas, transportes ferroviarios urbanos y suburbanos—, y sin embargo el déficit de Ferrocarriles es pagado por todas las provincias.

Lo mismo puede decirse del déficit de SEGBA. ¿O es que SEGBA está en La Pampa o en Catamarca? No, está aquí, en Buenos Aires. ¿Y quién lo paga? Lo pagan todas las provincias.

Estos temas deben analizarse así, en forma global, con todos los números sobre la mesa. Estos cuatro años nos han ayudado un poco a ver cómo se manejan los resortes del poder y a apreciar más la realidad.

Quiero que en la ley de presupuesto la información sobre el gasto público nacional por provincia, por jurisdicción, venga desagregada, con el dato de la ejecución trimestral.

Entonces sí veremos realmente si esta ley de coparticipación condice con lo que queremos hacer, es decir, una distribución pareja, razonable y equitativa de todos los recursos del país.

Otro tema que quiero tocar es el de los descuentos; un señor senador lo planteó anteriormente cuando habló del déficit cuasifiscal. Los descuentos del Banco Central son otra forma de asignar o reasignar recursos; por eso queremos que se nos diga qué jurisdicciones van. También queremos conocer adónde van los créditos *on lending*, esos créditos direccionales, de privilegio, que se otorgan a empresas radicadas en no sé cuáles jurisdicciones.

Por eso queremos poner todas las cartas sobre la mesa, entonces sí vamos a poder empezar a hablar de un federalismo integral.

Por otra parte, debemos también conocer los sistemas de promoción industrial y que se nos diga para cada área cuáles son los subsidios implícitos por jurisdicción que se conceden a través de la promoción industrial.

Creo que si nos damos cuenta de todo esto y de la influencia que ello tiene en la política de redistribución, podremos ir comprendiendo mejor esta compleja cuestión.

A su vez debemos también considerar lo que sucede con la inflación y su correlato de emisión, lo que no se coparticipa pero que se reasigna a través de todos estos mecanismos, como el del déficit cuasifiscal. Me refiero al famoso impuesto de la inflación, al que siempre calificamos como un impuesto reaccionario y retardatario, pero impuesto al fin, que no se coparticipa pero que sí se reasigna a través del déficit de las empresas del Estado y del déficit cuasifiscal. Todo esto integra la relación financiera y económica entre Nación y provincias.

Existe, además, otro tema relacionado; me refiero a la brecha cambiaria. En la medida en que obedece a elementos reales de la economía, esa brecha también significa un mecanismo de distribución.

Por eso digo que el tema es mucho más complejo que lo que parece a primera vista, y lo es a tal punto que los índices de distribución, diversos mecanismos que he

citado, van variando día tras día. El nivel de inflación, como dije, es un elemento de redistribución que obviamente modifica los índices en forma diaria. No sé si estoy siendo claro en mi explicación, pero quiero decir que a medida que se modifican los índices de inflación, las relaciones financieras entre la Nación y las provincias también se modifican. Esa es la razón por la cual hemos querido que las transferencias del Banco de la Nación sean hechas en forma diaria, con lo cual se va subsanando en parte el problema que plantea este nuevo elemento de redistribución que es el nivel de inflación.

Todos estos temas son los que queremos poner sobre la mesa e integran el complejo total de las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias. Son, como dije, el gasto público nacional, la brecha cambiaria, los préstamos *on lending*, los descuentos, los créditos a tasa regulada que existían hasta hace muy poco tiempo, los créditos subsidiados que existen actualmente, el nivel de inflación. Todos tenemos la leve sospecha de que los destinatarios de estos subsidios implícitos no están en el interior sino que corresponden fundamentalmente a la región central.

Quería hacer estos breves comentarios porque cuando hablamos de coparticipación nos estamos refiriendo a un aspecto de las relaciones económicas y financieras entre la Nación y las provincias. El avance en la concepción federal que estamos teniendo los argentinos nos lleva a reconocer que este proyecto de ley es un paso importante pero no debemos quedarnos aquí.

Le decía recién al secretario de Hacienda de la Nación, en uno de los pasillos cercanos al recinto, que los vamos a hacer trabajar un poco más. Por eso les vamos a pedir que nos manden desagregados por provincias todos los datos que he mencionado y los aportes que en cada estado provincial realiza la Nación en forma directa e indirecta y los subsidios explícitos e implícitos. Entonces, de ese modo, tendremos un panorama global, concreto, amplio, respecto de cuáles son nuestras realidades. Porque no es casualidad que cuando nos ponemos a analizar la tabla de las necesidades básicas insatisfechas, es decir, las carencias elementales —y no estoy tratando de dar lecciones sino de poner números sobre la mesa, porque, como ustedes saben, las matemáticas no son cuestión de opinión—; no es casualidad, digo que las necesidades básicas insatisfechas en la Capital sean del 9 por ciento, y que después siga la provincia de Buenos Aires con el 21 o el 22 por ciento, y luego, muy lejos, el resto de las provincias, habiendo algunas con

un 60 o 65 por ciento de necesidades básicas insatisfechas.

Y esto obedece muchas veces a que nos quedamos nada más que en aquello del acuerdo transitorio o la ley de coparticipación, que son los mecanismos que ayudan a pagar los sueldos —poco más, o poco menos— en las distintas provincias. Pero a través de todos estos otros caminos ha corrido el río grande de la reasignación de recursos, que no es lo que nosotros queremos.

Todo esto se refiere a la distribución primaria. Con respecto a la distribución secundaria, también tenemos algunas objeciones. En este sentido, quiero que quede firme, por lo menos en lo personal, el reclamo de la provincia de La Pampa.

Junto con otras tres provincias patagónicas, La Pampa es la de menor porcentaje de redistribución secundaria, con un 1,95 por ciento.

Se ha dicho que se utilizó el criterio de la brecha de desarrollo, y que ésta se determina históricamente por la relación inversa a la población, por la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, por el número de automóviles, por el nivel de las viviendas. Son criterios relativos. Quienes hicieron estos números saben que estos criterios también se modifican permanentemente con el tiempo.

Antes hacía a la brecha de desarrollo el tener un auto. Hoy en nuestras provincias hay autos que valen poco menos que dos o tres caballos; se trata de viejos modelos que aparecen en las estadísticas como automóviles. Lo mismo ocurre cuando hablamos de la vivienda. ¿Qué se entiende por "precariedad"? ¿Qué significa "hacinamiento"? ¿Qué significa "promiscuidad"? ¿Son los viejos criterios de las viejas leyes o cambian? Por eso, si nos pudiéramos a hablar en serio y pudiéramos todos los parámetros sobre la mesa, nos daríamos cuenta de que muchas de las cosas que decimos porque quizá fueron realidad en otro momento, en otras épocas, hoy no tienen vigencia.

Nuestra provincia, La Pampa, tiene apenas el 1,95 por ciento. No cuenta con regalías petroleras prácticamente. Por supuesto, no recibe otros subsidios, explícitos o implícitos, de los cuales recién estábamos haciendo alguna referencia.

Señor presidente: vamos a votar este proyecto de ley porque lo precisamos. Pero reclamaremos al gobierno central que a través del gasto público nacional vaya corrigiendo estos desequilibrios que existen todavía en esta norma, a través de las obras públicas, de la ayuda a las pro-

vincias en estado de emergencia, de sistemas crediticios compatibles con la producción de cada economía regional, para ir así revirtiendo esta situación por la que atravesamos.

Contamos con los mecanismos y con las posibilidades, y ahora empezamos a tener esta firme convicción federal. Ojalá así ocurra. Y si este año la ley de presupuesto cuenta con un anexo en el que se discrimina el gasto público nacional por provincia, habremos dado otro pasito más; si no es así, les pido a los amigos senadores que ayuden para insistir y lograr que esa discriminación exista.

Queremos transparencia; éste es un paso positivo. Esto dará transparencia, pero tenemos que seguir avanzando.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Señor presidente: tengo la impresión de que aunque todo el mundo va a votar este proyecto y deduzco que va a salir por unanimidad, evidentemente éste es un conjunto de quejas, y mi provincia, la de Buenos Aires, no puede estar alejada de las quejas.

Tal vez parezca una contradicción, y digo eso porque he escuchado a algunos señores senadores que ponen como ejemplo de mala distribución lo que le corresponde a mi provincia.

Quizá pocas provincias argentinas han tenido el sentido de solidaridad que siempre ha manifestado la de Buenos Aires. Lo que ocurre es que nuestra provincia está dividida en dos sectores: un conurbano y una pampa; es decir, una media ciudad y pequeñas ciudades, y después, la "tierra adentro". Pero cuando se hace referencia a la provincia de Buenos Aires, aquí y en cualquier parte, sólo se piensa en el conurbano de Buenos Aires, el que justamente está constituido por la inmigración interna de nuestro país.

Digo que necesitamos más coparticipación en la provincia de Buenos Aires porque hemos sido duramente castigados desde 1975 en adelante. Casi en el último año de un gobierno constitucional, la provincia de Buenos Aires tenía una coparticipación del 31,52 por ciento. A partir de allí, fuimos bajando como por un tobogán; en 1976, fue del 25,93 por ciento; luego, durante el proceso de la dictadura, no sé por qué razones, se fue acentuando la declinación de la coparticipación, como si la provincia de Buenos Aires se hubiese enriquecido en ese tiempo. Creo que sí, que durante el proceso se enriqueció la provincia, pero con muertos, desaparecidos y torturados; no aumentó la capacidad productiva de la provincia en esos años.

Llegamos así a los años 1983 y 1984, en los que nuevamente tuvimos un gobierno constitucional y otra vez se nos castiga duramente. En 1984, el gobierno constitucional establece el porcentaje en el 17,24 por ciento, hasta ese momento el más bajo de toda la historia en lo que se refiere a la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. No obstante, en 1985 ese porcentaje baja aún más, llegando al 17,03 por ciento. Arribamos así a 1986 y es entonces cuando se dan cuenta de lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, donde recibimos responsablemente a casi toda la República en el conurbano. ¿Por qué no se hace una estadística de cuántos correntinos, chubutenses, pampeanos, catamarqueños o de cualquier otro lugar están en la provincia de Buenos Aires?

Sr. Aguirre Lanari. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Gass. — Con mucho gusto, señor senador.

Sr. Aguirre Lanari. — Precisamente, esa es una de nuestras quejas, porque el gobierno de mi provincia ha recordado que Corrientes, con sus recursos, posibilita que los niños vengan al mundo, luego les paga la educación y después, cuando son hombrécitos, por falta de trabajo en su tierra van a engrosar el conurbano bonaerense.

De manera que no es nuestra culpa; lo que nosotros queremos es que se nos asigne la participación necesaria para evitar que ocurra lo mencionado precedentemente y que la provincia de Buenos Aires no tenga que sufrir la presencia de tantos correntinos.

Sr. Gass. — Muchas gracias, señor senador.

Hoy tengo más tranquilidad de conciencia para referirme a estos temas porque hasta el 12 de diciembre último era oficialista en el ámbito nacional y también en el provincial; pero ahora, por cuestiones de la democracia, soy solamente oficialista en el ámbito nacional pero no en el provincial. No obstante, no he dejado de ser provinciano y puedo afirmar que mi provincia nunca hizo esfuerzos para aumentar su población; deja que se vengan a instalar y que busquen su ubicación. Pero la realidad que existe en toda la provincia es que a esos habitantes tenemos que asistirlos en cuanto a salud, educación, vivienda y darles calles y caminos, electricidad, etcétera. Y me pregunto ¿con qué hacemos todo esto?

Hace poco tiempo se hablaba de la pampa húmeda; por desgracia, desde hace dos años ya no se puede utilizar esa expresión porque tenemos 7 millones de hectáreas bajo el agua. Entonces, la pampa húmeda se transformó en un río donde gran parte de la riqueza de la provin-

cia de Buenos Aires ha sido declarada en emergencia absoluta, donde no se cobran impuestos de ningún tipo pero la provincia tiene que seguir asumiendo todas sus responsabilidades.

Quería señalar esta estadística de mi provincia para que vean que no es ningún privilegio —como ha dicho hoy algún señor senador de mi bancada— lo que se le asigna a la provincia de Buenos Aires.

Observen que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3º y 4º, a la provincia de Buenos Aires le va a corresponder este año 21,5001 por ciento de coparticipación federal; es decir que todavía no llegamos al porcentaje de 1977 ni al de 1972 y, por supuesto, mucho menos al de 1975 que estaba en el orden del 35,52. Tampoco al de 1982.

Formulo estas breves consideraciones, señor presidente, porque permanentemente —y no es porque me sienta traumatizado por eso— cuando se habla de la provincia de Buenos Aires y lo mismo de la Capital Federal —de esta última no debo ser su defensor, no me corresponde—, pareciera que se está haciendo referencia a otro país.

No sé si recordarán los señores senadores cuando se trató en este recinto el proyecto de ley de instalación de fábricas de azúcar de remolacha y fructosa. En la provincia de Buenos Aires teníamos una sola fábrica de fructosa en la ciudad de Baradero, en la que no sé si los ciento cincuenta obreros eran nativos de la provincia. A pesar de mis esfuerzos, no pude conseguir que esa fábrica, que había empezado su ampliación por el año 1984, pudiera continuar haciéndolo como lo tenía presupuestado.

El proyecto de ley se aprobó sin esa posibilidad. Se hicieron acá grandes discursos señalando justamente que la provincia de Buenos Aires era un estado privilegiado.

Yo creo que es cierto. Considero que mi provincia es privilegiada, pero por su esfuerzo, y su trabajo, por el esfuerzo y el trabajo de todos los hombres de las provincias que vienen a vivir y a trabajar en Buenos Aires.

Estas son algunas pequeñas disgresiones que me hacen pensar que cuando algunos señores senadores hablan de que por fin tenemos el verdadero federalismo, en realidad están viendo dos clases de federalismo: uno para el interior y otro para la provincia de Buenos Aires.

Quiero rescatar para mi provincia el federalismo que quiere cualquiera de las otras provincias que forman nuestra República.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — Señor presidente, señores senadores: he escuchado con atención las distintas argumentaciones que se han vertido con motivo del tratamiento del proyecto de ley de coparticipación federal. Algunas de ellas me han sorprendido, porque como hombre del interior pienso que este Senado está conformado por representantes de las provincias argentinas e indudablemente es el órgano federal por excelencia que tiene nuestro país.

Digo que me han sorprendido porque pienso que el análisis de esta iniciativa tan ansiada por los gobiernos provinciales, por los pueblos que conforman nuestras provincias, debe tener la alta significación de realizar una evaluación de la realidad histórica de nuestro país. Esta evaluación histórica, esta mirada retrospectiva de nuestro pasado debe proyectarse para que en definitiva podamos emitir juicios de valor adecuados a la realidad actual, pensando siempre en el futuro. No voy a entrar en mayores consideraciones, pero no he de dejar pasar por alto algunas expresiones del señor senador Gass formuladas hace unos instantes.

En ese sentido, debo decir que nuestros hermanos catamarqueños, riojanos, santiagueños, salteños, tucumanos, cordobeses y de las demás provincias del país aspiran, anhelan y desean vivir en su tierra. No quieren el desarraigo, no quieren emigrar para integrarse a los bolsones de pobreza y miseria que existen en la provincia de Buenos Aires o el conurbano capitalino.

Nosotros aspiramos a que ninguno de ellos tenga que emigrar, porque cuando uno de ellos se va nos queda un profundo dolor, pues sabemos que se va hacia un futuro incierto.

Además, como decía el señor senador Gass, sabemos que por cada nuevo habitante de la provincia de Buenos Aires, serán muchos los recursos que se deberá utilizar, para atender su salud, su educación, los problemas laborales, su vivienda, etcétera. Por eso es importante no sólo esta ley de coparticipación federal, sino que es fundamental reformular un nuevo pacto federal en esta Argentina.

En 1986 se reunieron en la provincia de Catamarca diez gobernadores de provincias argentinas y en esa ocasión conversábamos y hacíamos un aporte a las demás provincias y al gobierno central para encontrar esa fórmula de equilibrio que nos venimos planteando todos los argentinos desde hace mucho tiempo. También hablábamos de la necesidad de reconocer al pueblo de las provincias, su derecho a concertar, a planificar y a instrumentar una política económica-social

de la Nación, teniendo como marco de referencia un proyecto nacional.

En esa oportunidad, hablábamos también del fortalecimiento del sistema federal para que las instituciones de la democracia sean custodias permanentes de la convergencia entre los poderes nacional y provincial, a los fines de evitar la sujeción de uno o de unos a otros.

También se habló de la integración de las regiones históricas de la Nación en los campos político, económico, social y cultural para que, compatibilizando sus necesidades, realidades y recursos garanticen la superación cuantitativa y cualitativa de los pueblos de cada una de las provincias argentinas. Ello lo planteábamos como una cuestión previa.

También hubo un tema que se trató en esas instancias y hoy reclama el gobierno nacional, que es la reforma constitucional.

Nosotros pensamos que definitivamente debe existir en la Argentina un nuevo orden, al cual debemos contribuir todos, un nuevo orden económico, político, social y cultural, como mencionaba anteriormente. A partir de allí creo que se podrá comenzar a marchar hacia ese futuro a que todos aspiramos.

Pero no quiero extenderme sobre este tema tan importante y trascendente sino que deseo remitirme muy brevemente al proyecto de ley que hoy estamos analizando y debatiendo.

Nosotros pensamos que el paso que se ha dado al tratar este proyecto ya es trascendente.

He tenido la honra de ser gobernador de Catamarca, y en cuatro años he conocido los sabores que significan, en muchas oportunidades, las arbitrariedades que se cometen con nuestras provincias. He conocido también la buena fe y en algunos casos, la mala fe de muchos funcionarios nacionales. Y en ocasiones he escuchado con desagrado que a los representantes de esos pueblos se nos trata como pedigüños que venimos a solicitar aportes que no nos corresponden.

Nosotros reclamamos por derecho propio lo que le corresponde a cada provincia. Y en ese marco este proyecto da un paso importante y superador, a pesar de algunas deficiencias que deberemos ir solucionando en un corto tiempo. Una de ellas es su transitoriedad, la vigencia por dos años; nosotros aspiramos a una ley de coparticipación permanente.

Otro de los hechos que preocupan a provincias como la nuestra es la distribución secundaria, que ha sido disminuida, como ya lo expresaron algunos representantes de otras provincias. En el caso de Catamarca, pasa del 2,99 por ciento al 2,86. Esa diferencia de 0,13 es para la nuestra

de una importancia fundamental porque significa la posibilidad de pagar o no a nuestros proveedores o a los empleados públicos. Catamarca quiere crecer con el país y darle también su aporte, pero no puede desarrollar sus recursos por una serie de limitaciones que no viene al caso enumerar ahora pero que lo hará en la oportunidad propicia.

Debemos agregar a esto que el proyecto da un aporte mayor a provincias como Buenos Aires. A pesar de ser respetables los argumentos expuestos por el señor senador por esa provincia, yo no los comparto en absoluto porque pienso que los recursos que de ella dispone son superiores a cualquiera de los que tienen las otras provincias del país. Creo que debe recibir lo que le corresponde, pero ello no tiene que ocurrir en desmedro de provincias como las nuestras.

Quiero señalar también en este Honorable Senado que lamento que ese aumento en el porcentaje de coparticipación sea el fruto de un acuerdo entre los representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires y los representantes del gobierno de la Nación.

Esto no sirve ni es lo que quieren los pueblos de las provincias. Esto es lo que debemos evitar definitivamente. Esto es lo que debemos cambiar en esta Argentina que queremos construir entre todos. Para ello también debemos buscar parámetros válidos para que, por medio de ellos, fijemos lo que le corresponde a cada provincia.

En el curso de este debate alguien decía que día a día la brecha del desarrollo se va agigantando, afirmación con la que estoy absolutamente de acuerdo. Pero para cambiar esos parámetros tenemos que abandonar los que hoy determinan en alguna medida, la coparticipación que deben tener las provincias.

Debemos terminar con el parámetro de la cantidad de habitantes de cada una y la distribución de los recursos en función de ello. Debemos terminar con las obras que se hacen en el país y que nos cobran a las provincias pero que a posteriori ellas no reciben los beneficios derivados de esas obras.

Esto es lo que yo creo y lo expreso en el Honorable Senado con absoluta humildad porque además pienso, como decía antes, que esta ley de coparticipación es perfectible.

Hemos visto reducido el 3 por ciento que se destinaba al Fondo de Desarrollo Regional al 1 por ciento para el Fondo de Aportes al Tesoro Nacional a las Provincias, destinado a atender catástrofes y desequilibrios económicos en nuestras provincias. Aspiro a que en la reglamentación de esta ley se establezca claramente cómo

se va a distribuir ese 1 por ciento. ¿O lo vamos a dejar librado al poder discrecional de quien ocupe el Ministerio del Interior? Creo que las provincias merecen esta consideración en la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, creo que esta ley tendrá que ser nuevamente analizada. Considero que deben cambiarse los porcentajes de la distribución primaria, como los gobiernos justicialistas planteamos: a las provincias debe corresponderles el 56,5 por ciento de la masa coparticipable, que en este proyecto se ve reducido en dos puntos.

También pensamos que este debate que se realiza hoy en la Cámara de Senadores debería tener un marco mucho más amplio. Así, tendrían que estar el pensamiento y la opinión de los gobernadores, las fuerzas vivas, y todos aquellos que tienen algo que aportar, que lo han hecho siempre y que en esta instancia política de la República permitiría encontrar ese punto de equilibrio al que aspiramos todos.

Por estas razones adelanto, señor presidente, el voto afirmativo del bloque justicialista y de los senadores por la provincia de Catamarca que lo integran.

Aspiro a que en 1989, cuando expire esta ley, tengamos elaborada y aprobemos, con la participación del conjunto, una ley de coparticipación federal permanente para todas las provincias argentinas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: es bueno discutir la forma cómo se van a distribuir los impuestos coparticipables entre la Nación y las provincias. Era una vieja aspiración de los senadores que integramos este honorable cuerpo, al punto que pese a estar en los calurosos días de enero estamos los senadores discutiendo un problema que nos tenía realmente preocupados, como es el sistema de coparticipación federal.

Por eso, cuando hombres con representación política empezaron a discutir este tema, nos pareció bueno que lo hicieran. He dicho solamente "con representación política" porque no tenían mandato expreso de las provincias argentinas para tal discusión. Y llegaron a esta conclusión, que es la iniciativa que estamos por sancionar hoy.

Vamos a tratar de ser justos: este régimen transitorio tiene cosas buenas, que nos impulsan a votarlo y nos reconfortan. Tiene también cosas que no nos gustan. Se discutió esto para tratar de lograr la "gobernabilidad del sistema", como se dijo en algunos medios periodísticos. Y nos parece bueno que sea el diálogo de los hombres

con representación política el que determine los rumbos a seguir para gobernar el sistema. Se llega así a una buena conclusión, aunque no es aquella a la que en definitiva aspiraríamos, en cuanto a la distribución primaria de la coparticipación federal. A esto se han referido ya muchos señores senadores, y por lo tanto seré breve.

El aumento de esta distribución primaria nos reconforta. No es la cifra que esperábamos pero nos gusta que haya aumentado. Nos parece bien que las provincias que fundaron la Nación tengan un mayor porcentaje en la coparticipación. Y nos parece bueno que el aumento de la coparticipación en favor de las provincias en la distribución primaria haya sido merced a un relegamiento de la Nación. Considero que hay que elogiar la ley, porque se trata de un avance.

Nos parece bueno que las remesas sean giradas a las provincias en forma diaria a través del Banco de la Nación y que éste no se vea beneficiado económicamente por este trabajo natural que debe cumplir un organismo de sus características. Se va a terminar, si esto se cumple —esperamos que así sea—, el permanente deambular de los funcionarios provinciales en las esferas nacionales, y cada día las provincias tendrán el control de los impuestos coparticipables y recibirán lo que realmente les corresponde.

Nos parece que tenemos que discutir el régimen definitivo de coparticipación federal, tomándonos nuestro tiempo para encontrar los parámetros de los que muy bien hablaba el señor senador Menem y a los que aludieron otros colegas. Con esos parámetros podremos lograr que la distribución secundaria sea razonable, prudente y que todas las provincias acuerden sobre este sistema para ir adecuándolo a su realidad económica.

Esta es la discusión que debemos realizar y en corto tiempo, porque este régimen transitorio no puede convertirse en definitivo por inercia de la Nación, las provincias o los cuerpos legislativos. No deseamos esa inercia sino que realmente se discuta este tema y se logre un régimen definitivo de coparticipación que tenga a su vez las pautas para distribuir, alternándolo en la medida en que varíen las economías provinciales, las condiciones de la población, las viviendas y cada uno de los demás; parámetros.

Hasta aquí estamos bastante de acuerdo con esta ley, y esto nos parece bueno.

Lo que a nos parece bien —y ya ha hecho referencia a ello por parte de otros señores senadores, por lo que seré breve—, es la distribución

Ahora voy a leer los valores de diferencia que existen en los coeficientes de distribución, teniendo en cuenta el acuerdo de 1986 y el proyecto de ley que estamos tratando en lo referido a la distribución secundaria de la coparticipación de impuestos.

Todas las cifras que voy a mencionar a continuación indican el porcentaje en menos que se le asigna a cada provincia respecto del que en su momento tenían determinado en función del acuerdo de 1986: Catamarca, 0,13; Córdoba, 0,33; Corrientes, 0,16; Chaco, 0,24; Entre Ríos, 0,24; Formosa, 0,17; Jujuy, 0,11; La Pampa, 0,09 por ciento; La Rioja, 0,10; Misiones, 0,16; Río Negro, 0,01; Salta, 0,18; San Juan, 0,16; San Luis, 0,11; Santa Fe, 0,07; Santiago del Estero, 0,20 y Tucumán, 0,23.

Repito que todas estas provincias tienen una diferencia en menos con respecto al último acuerdo de coparticipación celebrado en 1986; y esto no es bueno, es malo.

Lamentablemente, debo decir que la provincia que con tanto fervor defiende nuestro querido senador Cass, inexplicablemente aparece con una diferencia en más del 3,96 por ciento.

Sr. Cass. — ¿Me permite una interrupción, señor senador? Aclaro que yo leí la estadística con la paciencia de ustedes para demostrar cómo iba degradándose nuestra coparticipación sin que existieran razones para ello. A raíz de la especial situación por la que atraviesa la provincia de Buenos Aires, que ya he mencionado, por medio de ese acuerdo que ustedes señalaron entre el gobernador de mi provincia y el gobierno nacional, se ha entendido que debe aumentarse su coparticipación para dar respuesta a las necesidades que tenemos.

Sr. Rodríguez Saá. — Bien, señor senador. De todas maneras, si queremos discutir cuáles son las pautas definitivas a fijar para la coparticipación, pensamos que no es justo que la provincia de Buenos Aires cuente con un mayor porcentaje, considerando que es el estado más desarrollado, como bien lo mencionó el señor senador Romero Feri al indicar que es la provincia que recibe el mayor aumento.

No nos parece justo porque Buenos Aires, por ejemplo, tiene la mejor red de comunicaciones del país, que no será perfecta pero es la mejor; tiene las mejores redes de teléfonos, de caminos; la mayor cantidad de industrias, de puentes, de obras de infraestructura, etcétera. Esta es la realidad.

Pero hay que tener en cuenta otra cosa; me refiero a cuál es la diferencia que existe entre los recursos genuinos y los que reciben las provincias por coparticipación federal.

La provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de recursos genuinos tiene. Entonces, cuenta con la mayor posibilidad de desarrollarse en forma autónoma. Esto no hace al federalismo. Tiene razón usted en cuanto a que también la provincia de Buenos Aires tiene derecho al federalismo. Pero lo que sí motiva nuestra recriminación es que la provincia de Buenos Aires haya sido beneficiaria durante toda la historia de la distribución de la obra pública realizada por la Nación. Ha sido la máxima beneficiaria en este sentido. También parecería que alguna otra provincia, como nuestra querida hermana de Cuyo, Mendoza, se ha visto beneficiada.

Y esto sí es una crítica: me refiero a que la gobernabilidad del sistema es para algunos y para otros no existe.

¿Tiene derecho la Nación a gobernar a la Argentina? Muy bien; reconocemos el derecho. ¿Tiene legitimidad para gobernar el doctor Alfonsín? Tiene legitimidad, derecho a gobernar y a que todos le facilitemos la gobernabilidad del sistema en la Nación.

¿Tiene la provincia de Buenos Aires derecho a gobernar? Si, lo tiene. Pero las demás provincias, si conforman la mayor cantidad, tienen también derecho a la gobernabilidad del sistema. Y aquí parecería que lo que estamos haciendo es condenar a todas las provincias argentinas a no crecer. Las estamos condenando a que sigan golpeando en Buenos Aires las puertas de los despachos oficiales.

No quiero profundizar en este tema porque ya han hecho referencias todos los señores senadores. Sí digo categóricamente que el mismo derecho que tienen a gobernar Buenos Aires y la Nación lo tienen el resto de las provincias argentinas. Esta es la crítica, y me refiero —para ser justo— a la distribución secundaria.

En ese sentido, quiero expresar mi profunda discrepancia con el proyecto. Reitero que no es en cuanto a la distribución primaria, o al régimen de remesas al que se hizo referencia, y que es un gran avance.

Debemos realizar una discusión profunda sobre el régimen definitivo de coparticipación federal. Es necesario que nos comprometamos a facilitar esta discusión para que entre todos, con gran patriotismo, tratemos de fijar las pautas que permitan la mutación correspondiente, y de acuerdo con el crecimiento de cada provincia, su población y su índice de desarrollo, concretemos la gran ley de coparticipación federal que todos anhelamos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: creo que el debate que estamos realizando es uno de los más serenos que hemos tenido. Resalto esto, porque cuando se dijo que veníamos a discutir el tema de la coparticipación federal quizá más de uno, en su interior, pensó que este recinto se convertiría en un campo de batalla. Sin embargo, creo que es el debate más rico y más profundo que hemos realizado.

Observé y escuché con atención a cada uno de mis pares, y diría, sin exageración, señor presidente, que con una serenidad y sinceridad extraordinarias se ha dibujado el mapa trágico y dramático de nuestro país.

Cada señor senador, a través de lo expresado, ha expuesto las necesidades de su provincia. Es cierto que, quizá, éste no es el mejor proyecto posible. Pero creo que hoy empezamos algo tan importante que me hace recordar las palabras iniciales del preámbulo de nuestra Constitución: me refiero a un pacto preexistente a dar cumplimiento a los pactos preexistentes.

Y no puedo permanecer callada en este debate, señor presidente, porque hace cuatro años que soy una senadora que viene llorando por su provincia. Incluso, les consta a mis colegas que muchas veces he votado en contra de mi propio bloque para luchar contra la pobreza de Mendoza, esa Mendoza que en otros tiempos fue la provincia del buen sol y del buen vino. Y hoy sólo le queda el buen sol, no porque el vino sea malo sino como consecuencia de la extraordinaria crisis vitivinícola por la que atraviesa.

¡No le moleste, señor senador Rodríguez Saá, que haya subido un poco la coparticipación de Mendoza! ¡Se le deben tantas otras cosas a mi provincia, siendo tanto lo que Mendoza le da al país! Me refiero a aspectos tales como la energía, su riqueza minera y su buen vino, que también es necesario para la vida.

Y también puedo decirle, señor senador Gass, que si usted recorre el conurbano verá la presencia de muchachas y muchachos mendocinos que al no contar con fuentes de trabajo tuvieron que ir a esa área que rodea la Capital. Perdóneme, señor senador, pero con todo respeto le diré que se trata de un conurbano donde medran el vicio y otras tantas cosas, y al que la gente que viene del interior acude por estar desesperada, sin capacidad de trabajo, creándoles a ustedes un problema por resolver.

Por eso, señor presidente, terminaré esta intervención diciendo que como mendocina estoy conforme en cuanto mi provincia se lleva un punto.

Estoy convencida de que podemos hacer una ley mejor, de que tal vez ésta no es la más justa; pero lo importante es que hoy este Senado ha dado un ejemplo. Hemos hablado y discutido con serenidad. Quizá no estemos conformes con todo lo que tenemos para llevarnos; pero hoy se sienta una forma de discutir y de razonar que es la que debe predominar en este cuerpo para que podamos sancionar una ley fundamental y equitativa como ésta o como la de promoción industrial, que todavía esperan las provincias.

Sr. Presidente. — Tiene al palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sr. Genoud. — ¿Me permite, señora senadora por Santa Fe?

Me voy a referir muy brevemente a unas expresiones del señor senador por San Luis, que aludía a la situación de Mendoza en el proyecto de ley de coparticipación federal que estamos analizando.

No tenía pensado hacer uso de la palabra, pero como se ha aludido a la situación de mi provincia en este proyecto de ley de coparticipación federal, deseo referirme a expresiones del señor senador por San Luis, quien señala que Mendoza ha resultado beneficiada en esta distribución secundaria que contiene el proyecto en discusión.

Voy a hacer una reflexión. En general, el tenor de las expresiones de los señores senadores de todas las provincias es el de formular reservas al proyecto en debate. Todos, o por lo menos una gran mayoría, vamos a apoyar y a votar afirmativamente el tema en discusión, pero hacemos reservas, ponemos reparos.

Creo que hay un desenfoque en gran parte de las exposiciones que se han efectuado, toda vez que se apunta estrictamente al tema de los beneficios financieros en el asunto de la coparticipación federal.

Hace un tiempo, cuando tratamos el proyecto de traslado de la Capital, dijimos que como un modo de buscar y procurar un desarrollo armónico de todos los sectores de la geografía nacional...

Sra. Gurdulich de Correa. — Perdóneme, señor senador.

Sr. Genoud. — Son tres minutos, nada más. ...habíamos señalado la necesidad de establecer un pacto federal económico en el que no solamente las provincias determinaran con la Nación, el régimen de coparticipación federal de impuestos, sino también el sistema de la promoción industrial, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, el sis-

tema de liquidación de regalías, las tarifas energéticas, el sistema de coparticipación vial, porque en definitiva todos estos sistemas deben ser computados como una suerte de auxilio financiero a las provincias. Por eso me llama la atención que se señale a Mendoza como una provincia beneficiada en la coparticipación de impuestos. Apenas mejoramos algo pero estamos muy bajos con referencia al porcentaje del 5,38 anterior relacionado con el 4,33 que prevé el texto del actual proyecto de ley.

Entonces, no con el ánimo de polemizar ni cotejar posiciones con el señor senador por San Luis, digo que entre uno de los grandes beneficios fiscales que existen está el régimen de promoción industrial, que es uno de los sistemas más ignominiosos que alguna vez hemos enjuiciado en nombre de la provincia de Mendoza.

La de San Luis es una de las cuatro provincias que se encuentran en el Acta de Reparación Histórica, las que le han costado al país en su conjunto en los últimos cuatro años 7.718 millones de australes.

Todo esto constituye un beneficio impositivo. Si hubiéramos tratado esto con la amplitud de este pacto federal económico que alguna vez se ha reclamado en todos los ámbitos de todas las corrientes políticas, quizá el tema tendría que estar en consideración porque este régimen de promoción industrial para las cuatro provincias del Acta de Reparación Histórica le cuesta a Mendoza 173 millones de australes anuales. Es decir que deben computarse de un modo integral y no sectorizándolas en la coparticipación federal de impuestos.

Cuando se hace referencia a este tema sería bueno que las provincias analicen lo que están recibiendo por otros conductos. Mi provincia —como decía la señora senadora Malharro de Torres— es una postergada en el sistema de coparticipación vial y fundamentalmente en el sistema de promoción industrial en el que, reitero, todos estamos contribuyendo a través de su costo fiscal. Por eso estos conceptos deben ser tomados en cuenta a los efectos de computar esa cuota que se necesita para dar la aprobación a la medida. Si vamos a votar afirmativamente el proyecto de ley, no creo que sea conducente hacer comparaciones y pujas entre provincias. Lo que sí debemos hacer es buscar entre todos el modo de conciliar los intereses de la Nación y de las provincias a través del tan ansiado pacto federal económico.

Sra. Gurdulich de Correa. — Estoy en el uso de la palabra.

Quiero manifestarle al señor senador por Mendoza —quien no se refirió al tema en cuestión; fundamentalmente, porque aludió a la promoción industrial— que yo tendría el mismo derecho de discutir, como todos los senadores justicialistas, sobre cuál fue el plan de trabajos públicos en cada uno de estos cuatro años. También podría discutir sobre cuáles fueron las inversiones realizadas en las provincias en este lapso, como lo hemos hecho cada vez que nos ha tocado informar el tema de obras públicas en el debate de cada presupuesto. Porque cómo se invierten los dineros del Estado y de las empresas del Estado en cada una de las provincias también tiene que ver con todo esto.

Nosotros no quisimos traer aquí esta discusión. Creo que ése es un tema que debemos discutir con el conjunto de las cuestiones que hacen a las realizaciones de nuestras provincias.

Por eso, si hoy vamos a remitirnos a la cuestión de la coparticipación federal, pido a los señores senadores que se concreten al tratamiento de ese tema, porque de lo contrario vamos a traer al debate todos estos asuntos que hacen a la inversión de la Nación en las provincias. Acá hemos demostrado cada año cómo el gobierno nacional invertía en las provincias gobernadas por la Unión Cívica Radical —tanto con respecto a la cantidad de habitantes como a los kilómetros cuadrados de territorio— cifras enormemente mayores que las que se destinaban a las gobernadas por los partidos provinciales y por el justicialismo. Esto figura en cada uno de los diarios de sesiones y lo hemos citado cada vez que tratamos el presupuesto nacional.

Por eso creo que debemos remitirnos al asunto de la coparticipación federal: y voy a hacer uso de la palabra en ese sentido.

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

Sra. Gurdulich de Correa. — Sí.

Sr. Rodríguez Saá. — He leído una fría estadística sobre una diferencia en más o en menos. No he aludido a la provincia de Mendoza absolutamente para nada.

La pasión de los señores senadores por Mendoza es llamativa, pero no contesta mi inquietud. Planteé que la provincia de Mendoza había incrementado su coparticipación secundaria. Esto no me ha sido contestado. Se han enojado. Se ha hablado del tema de la promoción industrial con cifras que contestaremos una por una cuando tratemos el proyecto de ley de reconversión vitivinícola.

Sra. Malharro de Torres. — ¿Me permite una interrupción? He sido aludida.

Sr. Rodríguez Saá. — Sí, señora senadora.

Sra. Malharro de Torres. — No he hablado con enojo ni con pasión. Muy por el contrario, he dicho que ha sido el debate más sereno, más profundo y más concienzudo. Por lo tanto, no me incluya en el enojo.

Sr. Rodríguez Saá. — Retiro lo dicho. Retiro lo del enojo.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — Cedo el uso de la palabra al señor senador Saadi.

Sr. Saadi. — También he sido aludido por el señor senador por Mendoza.

Creo que el enfoque que él ha realizado no tiene nada que ver con el tema que estábamos discutiendo. Lamento, incluso, que él hiciera algún tipo de imputaciones, tal el caso de algunas partidas que pueden recibir las provincias.

Estimo que ése no es el marco en que se ha desarrollado el debate en esta sesión. Además le puedo decir, señor senador, para su tranquilidad, porque lo veo un hombre vehemente, defensor de los derechos de su provincia, que Catamarca, siendo una de las provincias marginadas del país pretende —y lo planteo en esta reunión, aunque ya lo hice en otras oportunidades— que se dicte una ley de promoción industrial que contemple a todas las regiones y provincias del país y que, por supuesto, sean atendidos en especial los intereses de las cuatro provincias integrantes del Acta de Reparación Histórica.

Así, una provincia pobre le ofrece a usted, señor senador, y a todos los señores senadores, la posibilidad de que discutamos este proyecto de ley y de que se dicte una ley que contemple los intereses de todos.

Sr. Solana. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente. — Está en uso de la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — Señor presidente: retomando el debate sobre el proyecto de ley de coparticipación federal digo que durante estos cuatro años los gobiernos provinciales se han visto sometidos, para obtener los fondos que les corresponden para su desenvolvimiento, a realizar penosas gestiones con funcionarios ministeriales investidos por el Poder Ejecutivo de facultades, para determinar montos y plazos de las partidas correspondientes.

Después de cuatro años de gestión y de innumerables propuestas realizadas desde el justicialismo para aprobar una ley de coparticipación

federal, vamos a sancionar hoy un régimen legal de carácter transitorio para la coparticipación federal.

Con la presente legislación, la masa de impuestos a recaudarse en el territorio de la Nación se distribuirá de acuerdo con porcentajes fijados por ley, con transferencias automáticas diarias del Banco de la Nación a cada provincia, no gravadas con ninguna tasa o servicio. Esto evitará negociaciones por los montos a percibir y dilaciones en los plazos, como hasta el momento.

Creo que esto es la esencia de lo que vamos a aprobar hoy. En ese sentido, pensamos que algunas de las críticas —con las que nosotros concordamos— son secundarias frente a la necesidad de establecer realmente esta relación institucional entre las provincias y la Nación.

Con la adhesión al presente régimen, las provincias estarán amparadas por un ordenamiento fiscal, ordenarán sus impuestos internos en forma armónica con los impuestos nacionales, evitando superposiciones y situaciones de inequidad impositiva. Asimismo, fijados los porcentajes y el sistema de distribución, se evitarán las negociaciones continuas con los funcionarios del Poder Ejecutivo, fuentes de conflictos permanentes y de actitudes discrecionales, tal como sucedió durante estos años.

Con el funcionamiento adecuado de la Comisión Federal de Impuestos, que fiscalizará y fijará normas relativas a los procedimientos a aplicar, estimamos que esta legislación transitoria definirá las bases permanentes para un régimen justo de coparticipación federal. Asimismo, resulta importante la creación de la Comisión para el Análisis de las Políticas de Empleo, Salarial y de Condiciones de Trabajo de los servicios prestados a nivel nacional y provincial que, a corto plazo —90 días—, deberá establecer las bases para la formulación de una ley que regule la política en la materia.

Señor presidente: considero que el presente proyecto de ley constituye un importante avance hacia una relación más justa entre la Nación y las provincias, en lo que hace a la coparticipación federal de impuestos y que, a pesar de su carácter transitorio establece bases para regular este sistema rentístico; pero coincidimos profundamente con el señor senador por San Luis en lo que se refiere a que este régimen debe ser perfeccionado y que una ley en este sentido debe estar inserta en el marco de un profundo pacto federal, por el que todos traba-

Señor presidente: de acuerdo con estas breves consideraciones, juntamente con el señor senador Luis Rubeo y representando a la provincia de Santa Fe, adelanto nuestro voto favorable a esta iniciativa.

Sr. Solana. — Insisto en mi pedido de palabra para plantear una moción de orden.

Solicito que el señor secretario tenga la amabilidad de informarme quiénes están anotados en la lista de oradores.

Sr. Trilla. — Señor presidente: deseo quedar incluido en dicha lista.

Sr. Britos. — Pido la palabra...

Sr. Presidente. — Se ha pedido la palabra para una moción de orden, señor senador.

Sr. Secretario (Macris). — Los señores senadores anotados son Jiménez Montilla, Brasesco y Sapag.

Sr. Britos. — Yo he pedido la palabra.

Sr. Secretario (Macris). — Y el señor senador Britos.

Sr. Solana. — Señor presidente: formulo moción de orden de que, completada esta lista de oradores, se cierre el debate.

Estamos tratando ya aspectos marginales de la cuestión principal que se ha debatido extensamente. Yo también me siento tentado a incursionar en este abanico de cuestiones que se ha abierto. Pero comprendo que ésta no es la hora indicada para hacerlo y tampoco la situación del debate lo autorizaría decorosamente.

Me parece razonable que con la exposición que hagan los señores senadores anotados se cierre el debate y se pase a votar en general.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador por el Neuquén

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consecuencia, se cierra la lista de oradores con los señores senadores que ya están anotados.

Sra. Rivas. — Yo había pedido la palabra antes.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Jiménez Montilla. — Señor presidente: voy a ser muy breve en mis expresiones teniendo en cuenta que a esta altura del debate el tema de este proyecto tratado en general se encuentra no solamente ampliamente considerado sino que la mayoría de las provincias ya han manifestado su opinión acerca del mismo.

Me sumo a los que ya han volcado sus quejas con respecto a este proyecto de ley. Lo digo muy respetuosamente. Solamente he escuchado a un senador, el representante por el Chubut,

hablar loas en favor del proyecto. Sin embargo la mayoría —y he tratado de fijar los términos expuestos, por ejemplo, por los señores senadores por San Juan, Corrientes y La Rioja— ha vertido conceptos que fueron sintetizados en su conjunto en la lectura que ha hecho el senador por San Luis cuando se refirió a los índices que cada provincia ha obtenido. La provincia que represento, Tucumán, ha sido posiblemente la más perjudicada.

Parecería que un pequeño porcentaje como es el 0,23 fuera una porción ínfima o mínima que carece de importancia. Sin embargo, haciendo números uno llega a la conclusión de que ese porcentaje del cual se ha privado a la provincia, asciende, traducido en australes, a la suma de ocho millones aproximadamente, y resulta que ello bastaría para pagar la jubilación de un mes a toda la clase pasiva de la provincia. Esto de por sí da la pauta de que realmente las provincias se han visto sensiblemente perjudicadas y de que no resulta acertada la idea de que se las ha beneficiado.

En otros términos, ha fallado en este aspecto el federalismo, porque éste realmente se hace con la participación total de las provincias hermanas que se conforman dentro del ámbito argentino en torno a la Capital de la República.

Digo que no es saludable porque es común observar que únicamente algunas provincias —muy pocas— han sido beneficiadas con estos porcentajes, no así la mayor parte de ellas.

Todo ello nos está dando la pauta, señor presidente, de que esta ley no es completamente beneficiosa para las provincias argentinas. De cualquier forma, siempre es un paso que se da en este diario andar provinciano recurriendo a las arcas de la Nación para poder paliar sus necesidades. Podremos, así, aunque sea escasamente, venir tranquilos y no en tren de humillarnos buscando al funcionario de turno para que nos haga liquidaciones y diga cuándo podrá cobrar la provincia para hacer frente a sus necesidades.

De todas maneras, señor presidente, siempre es conveniente recurrir a las mejoras saludables que puedan obtenerse cuando llegue la hora de volver a tratarse este tema que, sin duda alguna, será oportuno hacerlo porque así no sólo va a convenir a las provincias sino que también, cuando mejoren las finanzas de la Nación, podrá buscarse otro remedio para lograr que las provincias tengan lo que realmente merecen.

Hablando del federalismo quiero recordar que desgraciadamente las provincias argentinas no han podido lograr lo que en buena hora en su ocasión algunas provincias como La Rioja, Ca-

tamarca, San Luis y San Juan obtuvieron la radicación de industrias. Aún recuerdo el episodio doloroso que se produjo cuando, sancionado por este Cuerpo el presupuesto anterior, al volver a la Cámara de Diputados encontró la oposición de ésta y se eliminó ese saludable remedio que se había previsto en ese presupuesto. La medida de la radicación hace al federalismo y no sólo tenderá a promover un régimen que enriquecerá a las provincias sino que también constituirá un aporte para la Nación entera.

Señor presidente: hablo en nombre de mi provincia, desconocida por quienes han fijado estos porcentajes. Realmente no me explico cuáles han sido las bases fundamentales que se han tomado para fijar los porcentajes en mayor o menor proporción. Pero sí cabe aclarar que no sólo Tucumán sino casi todas las provincias argentinas se encuentran en la creciente necesidad de buscar recursos para dar solución a sus ingentes problemas.

Tucumán no ha escapado de los desastres, de la furia del tiempo. Así, se han producido inundaciones, caída de puentes, anegamiento de grandes zonas cultivadas. Además, la promoción de la industria azucarera ha sido mal encaminada y su administración desde la Capital Federal la ha empobrecido.

Con este sistema de maquila, no obstante haber escuchado en alguna oportunidad en este cuerpo que se ha beneficiado a las provincias, puedo asegurarles que, por el contrario, se las ha empobrecido. Así, puedo asegurar que hay muchos productores cañeros que a esta altura, en 1988, no han cobrado aún la parte correspondiente a 1985 y 1986.

Amén de eso tenemos el ejemplo clásico de la mala administración que ha hecho la Dirección del Azúcar, de la que casi todos sus directores hoy se encuentran con prisión preventiva. Y he hablado de mala administración, aunque podría haber aludido a irregularidades o a la existencia de delitos.

Por otra parte, señor presidente, debo manifestar que Tucumán también se ha visto azotada por el flagelo de la estafa del proceso. Varios organismos nacionales han sido volcados sobre la economía provincial. Tal es el caso de la Dirección del Agua y de escuelas, con el consiguiente perjuicio para las arcas provinciales. Para mayor desgracia, una administración del proceso tuvo la feliz idea de rebajar el porcentaje de los jubilados del 82 al 70 por ciento. Con el retorno al régimen constitucional, casi todos los jubilados de la provincia iniciaron juicio, consiguiendo la reivindicación de su dere-

cho, en detrimento del Instituto de Previsión y Seguridad Social, que debe afrontar el pago de ingentes cantidades de dinero, además de las costas.

Todo ello, señor presidente, pinta un cuadro desolador de la situación de Tucumán. Y al ver los porcentajes que el artículo 4º determina para otras provincias que se han beneficiado con el estado de emergencia, digo que se han olvidado de Tucumán.

Tucumán, que ha sido cuna de la Independencia, no podrá seguir siendo el jardín de la República. Esa tierra fértil se tendrá que transformar en estéril, donde no habrá pan ni progreso.

Por ello, al hablar en este momento, hago votos para que pronto volvamos a encontrarnos con este tema, a fin de buscar el remedio que significa aumentar los porcentajes para las provincias, para que puedan desenvolverse con dignidad dentro del conjunto de sus hermanas argentinas y sea viable el progreso dentro de nuestra República.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: he escuchado con suma atención las distintas expresiones y conceptos que se han vertido en este debate sobre coparticipación federal de impuestos, dentro de un régimen transitorio.

Hay un mínimo común denominador de todos los estados federales: justicia para la distribución de la recaudación impositiva en el mapa de la República.

Indudablemente somos un país con historia, una nación grande. Vengo de una provincia que tiene sus problemas y en donde aparece ese mínimo común denominador, que es el ansia de justicia distributiva de la recaudación fiscal. No se ignora que, a pesar de sus necesidades, hay otras provincias hermanas que están en una situación muy desventajosa con respecto a Entre Ríos. No podemos ignorar que nuestro país tiene dos Argentinas identificadas cuando éramos niños y estudiábamos geografía: la Argentina del río Colorado hacia el Norte, y la del río Colorado hacia el Sur. No podemos ignorar tampoco que existe la otra Argentina, la de la llanura del interior, la de la llanura boscosa o chaqueña, la de los Andes septentrionales y centrales y la de la pradera o pampa húmeda, la de la Mesopotamia, regiones geográficas con recursos disímiles, con corrientes inmigratorias distintas, con tratos históricos diferentes, con suertes diversas.

Algunas provincias fueron colonias de mi país bajo el rimbombante título de territorios nacionales, fueron el escenario del atropello y de la

arbitrariedad de los gobiernos centrales por mucho tiempo. No podemos ignorar a la Patagonia, con Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, y también a las provincias andinas. Todos tenemos problemas distintos, todos tenemos una llaga por la cual llorar, tanto los de la Capital Federal como los de Buenos Aires, Santa Fe, todo el Norte, Entre Ríos en sus zonas desarrolladas y subdesarrolladas.

No hay un solo gobernador de ningún estado federal que haya tenido la dicha de quedarse en su casa estos últimos cuatro años sin necesidad de venir a la Capital a peticionar recursos fiscales. No fue el drama de un partido; fue el drama de un sistema y de un régimen rentístico distorsionado a través del tiempo y que no responde a las necesidades nacionales. Va a ser necesario meditar en su transformación para que no discutamos ya sobre la coparticipación sino acerca de la distribución de la renta nacional de acuerdo con las necesidades y las potencialidades económicas, dentro de un marco de justicia y desarrollo y con un alto sentido social respecto de los pueblos que habitan nuestras provincias.

Todos tenemos problemas. Yo, en nombre de mi provincia, tengo los míos como cada uno de los señores senadores los suyos. Por eso entiendo que este debate debe servir para hacernos reflexionar y para que esta Cámara no se siga convirtiendo en el receptáculo de las quejas sino en el ámbito de elaboración de una distribución sana, lógica, justa y equitativa para todos nosotros, asumiendo su carácter de cuerpo federal. Por eso debemos ayudarnos entre todos para que cada uno reciba lo que deba recibir.

Después de cuatro años de ser senador nacional, hoy vengo a hablar en nombre de mi provincia cuyo gobernador no representa a mi partido político; sin embargo, es el hombre que ha elegido el pueblo y él ha prestado su apoyo a este proyecto de ley. La totalidad de los legisladores de Entre Ríos que forman parte de la Cámara de Diputados de la Nación, justicialistas y radicales, han votado a favor de esta iniciativa. No es la ley que todos queremos pero es la que resulta necesaria dentro de la coyuntura actual para empezar a perfeccionarla.

Con esto venimos a iniciar quizás el camino de un nuevo pacto federal, como hoy se dijo, de un nuevo Acuerdo de San Nicolás, que seguramente está esperando el país. No estábamos acostumbrados a la necesidad de establecer un marco de gobernabilidad porque, insólitamente, estamos transitando el camino de un perfeccionamiento del sistema democrático después de las tragedias que empezamos a vivir desde el año 30. Ahora, afortunadamente, hemos visto el

traspaso de los poderes, la coexistencia pacífica de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, el funcionamiento del Poder Legislativo, en donde nadie es dueño de mayorías absolutas. Entonces, indudablemente, los **políticos argentinos** nos vamos encontrando hoy en otro terreno, que ha dejado de ser el terreno puramente político, el de la defensa del **sistema representativo** y republicano, el de las libertades públicas, el de elegir y ser elegido. **Hoy estamos** ya transitando en la coincidencia de un régimen federal nuevo; esto es lo que significa la coparticipación. Es un comienzo, lleno de defectos, lleno de errores.

Cada uno tiene un déficit en esta distribución. Cada uno tiene un derecho que reclamar y un proyecto de futuro. Pero es la primera ley que empieza a transitar por este camino.

Por eso, señor presidente, como senador por la provincia que asumió la responsabilidad de hacer obras públicas nacionales con su propio erario; como representante de una provincia que ha trabajado históricamente por la organización nacional; de una provincia que se convirtió durante muchos años en la fuente de maestros, a través de la escuela normal o del viejo colegio histórico de Concepción del Uruguay, de donde salieron tantos hombres públicos; de una provincia que tiene tres puentes internacionales y un túnel subfluvial con el que el esfuerzo provincial de Santa Fe y Entre Ríos le dijeron al país en nombre del federalismo que las provincias eran capaces de realizar las grandes obras interprovinciales, voy a votar favorablemente este proyecto de ley.

No lo voto como hombre de la Unión Cívica Radical sino como representante del estado federal de Entre Ríos. Y lo voto para perfeccionarlo, para que mañana los gobernadores y los senadores se reúnan y, con un trabajo de hormiga que no dure uno o dos meses sino uno o dos años, elaboren el proyecto de **reforma constitucional** que determine el nuevo régimen rentístico federal de la República Argentina.

Voto este proyecto sabiendo que a mi provincia no le llega lo que le tiene que llegar, y también sabiendo que son muchas las provincias que se encuentran en esta situación. Pero lo voto porque este es el principio de la solución, de la gobernalidad.

No miro la cara de los hombres que han empezado a realizar el acuerdo. Bien venidos los que empiezan a concertar, si nos enseñan el camino. Lo importante es que todos los estados federales de la Argentina tenemos que darnos las manos y hacer la cadena de hombres de **país** que van a luchar por el progreso del país.

Quiero a la provincia de Buenos Aires, a pesar de los históricos enfrentamientos que tuvo con la provincia de Entre Ríos. La quiero como a una hermana mayor. Quiero a Salta, La Rioja, Catamarca, a la gente del Sur, al querido y único territorio nacional de la Tierra del Fuego. Pero los quiero en el gran debate nacional, todos abrazados para hacer la unión nacional, que no tiene que ser solamente espiritual, la del himno, la de la escarapela, la de la bandera, sino que también tiene que ser la unión que se mancomuna en un régimen económico-fiscal beneficioso para todas las provincias, sobre la base de un mínimo común denominador de solución nacional para todos los problemas.

Por eso, señor presidente, como senador por la provincia de Entre Ríos, expreso el anhelo de que los gobernadores todos de la República, con sus senadores y los partidos políticos, estudien y perfeccionen un proyecto de reforma constitucional que consagre directamente un régimen rentístico y fiscal federal nuevo en el país. Voto, pues, en favor de este proyecto, imperfecto pero necesario.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Sapag. — Señor presidente: después de escuchar con mucho detenimiento a todos los señores senadores que representan a la República, veo el cuadro real de la pobreza y de las dificultades en que vive el país. Cada uno de nosotros ha expuesto los problemas de su provincia.

En este debate sobre el proyecto de ley de coparticipación federal, que no es otra cosa dentro de nuestro sistema impositivo que la distribución de lo que podamos crear a cada provincia por parte de la Nación, no se atiende a la solución del problema real que vive la República.

La problemática del país se solucionará cuando podamos crear las posibilidades de que la producción de la República dé las riquezas suficientes para que nuestras provincias no tengan en cuenta el porcentaje que les puede haber acordado este proyecto de ley.

No tenemos que discutir por céntimos, por cientos de miles o por millones; en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en crear las posibilidades de que la República vuelva a retomar el destino que le corresponde según sus grandes riquezas y posibilidades.

Quiero invitar a cada uno de mis pares y al Poder Ejecutivo nacional para que estudiemos rápidamente cómo vamos a encauzar el ahorro nacional hacia la producción: cómo vamos a lo-

grar que nuestra banca otorgue créditos a intereses internacionales para que se vuelvan a abrir nuestras fábricas, para que nuestras industrias vuelvan a retomar el camino que les corresponde para crear grandes riquezas que distribuiremos entre nosotros.

Creo que después de lo que hemos escuchado es indispensable que pensemos en la Nación. Hemos estado pensando en nuestras provincias y creo que es mucho más urgente que pongamos nuestra atención para no continuar con este sistema financiero que establece que los recursos de la Nación no están al servicio de la producción.

Es indispensable que en vez de 30 millones de toneladas de granos se puedan producir 100 millones de toneladas, pero eso sólo lo podremos lograr cuando los créditos bancarios estén en relación a las posibilidades de quienes los necesitan y no continúe quebrando todo el país cuando recurre al crédito.

Ese es el problema de fondo; la distribución es muy pequeña y lo que estamos discutiendo no tiene significación en cuanto al destino de la República.

Entiendo que este debate ha puesto al desnudo, en su análisis y radiografía, a cada provincia, las que han efectuado sus reclamos, que son justos y correctos. Pero todos en conjunto tenemos que pensar en la República Argentina, a la cual pertenecemos y que se encuentra en un receso increíble considerando las riquezas y posibilidades que tiene.

No sigamos más con los intereses del 10 o el 20 por ciento para que las fábricas no puedan nunca más abrir sus puertas. Si es necesario, tenemos que buscar el modo de autofinanciarnos, aunque sea emitiendo dinero, para que la producción respalde la emisión y nos permita entrar a los mercados con eficiencia, con dinero genuino y no con préstamos del Fondo Monetario Internacional o de algún banco extranjero.

Apelo a todos los aquí presentes. Les he dado mi pensamiento. La República necesita leyes que transformen nuestra pobreza y para hacerlo tenemos que volver a producir y a intercambiar. Es urgente que lo hagamos.

Estas son mis expresiones y agradezco a los señores senadores que me hayan permitido decirlos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: no iba a hacer uso de la palabra. Me he sentido reconfortado por la vocación con que han expuesto en el

res realmente federativa— cada uno de los senadores que ha hablado, quienes han puntualizado las diferencias existentes en este tema.

Tengo que referirme, porque ha sido mencionado, a beneficios que podemos tener nosotros, los puntanos. Tengo que recordarles —y le pido excusas al señor senador por Neuquén— que ello se debe a que en su momento, cuando se sancionó la ley de reparación histórica, se efectuó un reconocimiento a las provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis, por lo que habían dado en la etapa de la reorganización nacional.

He hecho esta salvedad dado que esta noche, en cada exposición, evidentemente cada señor senador ha tratado de hacer escuchar a su provincia para que sus conciudadanos se sientan realmente interpretados.

Creo que esto nos ocurre porque hace casi cuatro años que estamos analizando las posibilidades que tenemos. Una serie de desencuentros no nos han permitido ponernos de acuerdo.

Es cierto que existió un proyecto sobre este tema. También es cierto que quedó en la Cámara baja. Pero no ha sido por nuestra culpa. Tal vez se debió a la desconfianza natural que vino después del proceso militar, por la que nosotros, los que teníamos alguna responsabilidad política, no supimos asumirla después del 30 de octubre de 1983.

Tenemos que asumir nuestras responsabilidades, debemos discutir en el recinto, en las comisiones. Estamos un poco lerdos, pero vamos a ir logrando coincidencias. Tal vez algunos serán más beneficiados que otros. Quizás a algunos se le hayan contemplado los intereses más que a otros; pero, en definitiva, está el país que heredamos, hipotecado, al que lamentablemente nosotros no hemos podido sacarlo de esta situación.

Pero a nosotros, compañeros, correligionarios, conciudadanos nos dieron esta responsabilidad para discutir. Por eso veo auspiciosa esta reunión y digo que voy a dar mi voto afirmativo a este proyecto. Lo voy a hacer con muchas ganas, porque quizás dentro de dos años habremos logrado ese equilibrio que buscamos esta noche y tal vez con esto le demos una respuesta a todo el pueblo argentino.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: seré muy breve en mi exposición dado que mi compañero, el señor senador Jiménez Montilla, ya ha expuesto la situación de Tucumán.

Vamos a votar favorablemente este proyecto de ley de coparticipación federal, como lo ha mencionado hace un momento el señor senador por Mendoza. No estamos de acuerdo, pero sin embargo lo vamos a votar favorablemente.

Estamos tratando un proyecto de ley que es fundamental para el país. Se trata de una ley de coparticipación que es transitoria —tiene una duración de dos años— y que, si bien tiene sus falencias, sirve para seguir trabajando a fin de conseguir en lo sucesivo algo que realmente satisfaga a todas las provincias.

Después de cuatro años de desfile de ministros de Economía de todas las provincias por la Secretaría de Hacienda, como si éste fuera un ámbito virreinal de un despotismo centralista, practicado por el gobierno portuario, tenemos hoy la ley de coparticipación.

Es el comienzo. Así también lo han manifestado los demás señores senadores que han hecho uso de la palabra. La norma se irá perfeccionando; no renunciamos a una solución permanente, que ha de pasar por la reformulación total de las relaciones entre el gobierno nacional y las provincias. Es decir un nuevo y definitivo pacto federal que ya el justicialismo sostuvo en la propuesta programática apoyada el 6 de septiembre pasado.

También, los señores senadores se han referido a una ley de promoción industrial. Es real que cuando tratamos el presupuesto el año pasado, marcábamos las diferencias porque había cuatro provincias que continuaban con este régimen. No estamos en contra de ellas, pero en su oportunidad, presenté un proyecto proponiendo la ampliación a todo el país.

Entonces, para que esto sea concreto, es necesario que en fecha próxima nos aboquemos todos los señores senadores a tratar el proyecto de promoción industrial; y, así como hoy dejamos sentada nuestra protesta, ya que el presente proyecto de coparticipación federal no satisface a todos los señores senadores, sería bueno, en la correspondiente oportunidad, sancionar la ley de promoción industrial, para satisfacción de todo el país.

Sr. Presidente. — La Presidencia va a llamar para votar.

Sr. Trilla. — Señor presidente: he pedido la palabra. Como presidente de la Comisión, necesito aclarar dos o tres aspectos.

Sr. Rodríguez Saá. — Está cerrado el debate.

Sr. Trilla. — Hablé una sola vez, en una breve exposición, al principio de esta reunión. Creo que, por reglamento, me corresponde hacer uso

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: deseo aclarar algunos aspectos que me parecen importantes, más allá de que yo interprete, según el análisis total de los discursos, un acuerdo generalizado en cuanto a la bondad del proyecto de ley de coparticipación federal, con el que entramos en un régimen de mayor claridad respecto de la situación financiera y fiscal entre la Nación y las provincias.

En general, no hubo críticas profundas alrededor de los temas globales. Existieron en cuanto al artículo 4º, y escuché de parte del señor senador Rodríguez Saá una lista completa. Pero, además, escuché a cada uno de los señores senadores hacer consideraciones referidas a sus provincias. En este sentido, creo que es digno de todos reivindicar los intereses de sus representadas, tratando de captar algún tipo de porcentaje histórico.

Al respecto, deseo aclarar que, con referencia exclusiva a la ley 20.221, la mayoría de las provincias tienen algún porcentaje mayor. Sucede que el gobierno nacional, como consecuencia de haber finalizado la vigencia de la ley anterior en 1984, durante 1985, 1986 y, fundamentalmente, durante 1987, hizo esfuerzos para poder solventar los reclamos de las provincias, con el objeto de manejar presupuestariamente los mayores gastos que en general han tenido la administración nacional y las provincias.

Tanto es así, señor presidente, que el porcentaje para la coparticipación federal primaria, que en 1984 era de 48,5, ahora asciende a un 54,6, o sea que hubo una mejora, y que además se distribuyó en las provincias en mayor proporción, menos en cuatro o cinco, en que el porcentaje es menor.

Como el esfuerzo del gobierno nacional fue mayor en 1987, distribuyó el 48 por ciento del ingreso en aportes otorgados a cada una de las provincias. Lógicamente, por determinada circunstancia, habrá tenido algo más como aportes del Tesoro. Respecto de la ley 20.221 en todas se produce un incremento en pesos constantes; en Chubut, Misiones, Neuquén, Salta y Santa Cruz, está en el orden del 0,1 por ciento. El resto tiene algo más. Evidentemente, tiene que ser así porque el monto global que se distribuye pasó del 48,5 por ciento al 54,6 por ciento, además de haber aumentado el número de impuestos que integran la coparticipación.

Por otro lado, deseo aclarar algunas manifestaciones que se han hecho en el sentido de que las provincias gobernadas por funcionarios radi-

cales tienen mayores porcentajes. Estoy en conocimiento de la permanente protesta silenciosa, llamémosla así, que hacen los gobernadores radicales y, entre ellos, los de algunas provincias que asumieron obras públicas nacionales —como mencionó aquí el señor senador Brasesco—; me refiero concretamente a Entre Ríos. La mayoría protestaba porque algunas provincias vecinas con gobernadores justicialistas tienen mayores ventajas. De cualquier forma, el gobierno nacional hizo sus esfuerzos.

Mientras la provincia de Buenos Aires tuvo un gobernador radical, sufrió una muy pronunciada merma debido a la necesidad de solventar a otras provincias. En 1983 el porcentaje que le correspondía era de 22 puntos; en 1984 se redujo a 17 y en 1986 pasó a 19. Como vemos, a partir de 1984 fue mucho menor que el 22 por ciento que le asignaba la ley anterior. Ahora se recupera en alguna medida. Es otro esfuerzo que se ha hecho.

Quería aclarar esto más allá de las circunstancias propias que hacen a la defensa de los intereses naturales de cada una de las provincias, lo que me parece muy digno y loable; quizá no sería bueno que no fuera así porque éste es un cuerpo federal.

Por otra parte, se ratifica la vigencia de la Comisión Federal de Impuestos, netamente federativa pues está conformada por veintitrés miembros, un representante de la Nación y uno por cada provincia adherida, con un voto cada uno. Allí podrá observarse el comportamiento de esta ley y las perspectivas de modificación para una futura norma que deberá comenzar a tratarse dentro de dos años. De tal forma que la propia ley establece los resortes capaces de sortear estas dificultades.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Si me permite, deseo efectuar algunas aclaraciones al señor senador Trilla con respecto a los porcentajes percibidos por la Nación y las provincias.

Antes existían los ATN —aportes al Tesoro nacional— que les daban a las provincias, cosa que ahora prácticamente se ha reducido al uno por ciento.

Además, la provincia de Buenos Aires recibía —y hay aquí una confusión en cuanto a la percepción— un 60 por ciento de coparticipación y un 40 por ciento de ATN.

Sr. Martiarena. — Con permiso de la Presidencia deseo hacer una pregunta al señor senador Trilla.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra ya que he sido aludido.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Deseo solicitar una aclaración al señor senador Trilla, quien en cierto sentido ha asumido —y tiene derecho a hacerlo— el rol de informante ya que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Mi inquietud se refiere a la fecha de vigencia que indica la ley y el momento de su aplicación. Deseo saber si lo recaudado desde el 1º de enero hasta el momento en que se aplica que esta ley será efectivamente girado a las provincias, porque tenemos entendido que a raíz de la demora en el trámite de este proyecto la Secretaría de Hacienda no ha efectuado los giros para el pago de los haberes. Nuestra provincia se ha visto en la situación de pagar solamente la mitad del aguinaldo y de tener a su personal sin poder percibir los sueldos del mes de diciembre.

Sr. Trilla. — El proyecto indica que la ley regirá desde el 1º de enero de 1988. Esto significa que cuando entre en vigencia, a partir de su promulgación, la Secretaría de Hacienda deberá hacer los ajustes que correspondan entre lo que ha enviado y lo que corresponde conforme a los ingresos que se hacen a través del Banco de la Nación.

Por otro lado, reitero que la Comisión Federal de Impuestos que está en vigencia, es la que controla tanto a la Dirección General Impositiva como al Banco de la Nación Argentina a los efectos del cumplimiento, o sea que está cerrada —digamos así— la situación que se plantea.

Por otro lado, si así no fuera se harían las críticas del caso.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra para una aclaración porque he sido aludido, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: me quiero referir a dos afirmaciones del señor senador Trilla.

En primer lugar, el miembro informante no puede manejarse con una ley que no está vigente. La realidad económica indica que las provincias y la Nación —así lo entiendo yo y quiero que me corrija el señor senador Trilla si me equivoco— se estaban manejando, en la distribución secundaria, con el acuerdo de 1986, que era el último coeficiente disponible en la dis-

tribución de la coparticipación federal entre la Nación y las provincias. Esta es la realidad económica.

Entonces, cuando nosotros decimos que es bondadoso el régimen de distribución primaria, que es bondadoso el diálogo, que es bueno que estudiemos la ley y que la profundicemos, estamos haciendo una crítica sana al proyecto. Cuando, manejándonos con la realidad económica nos oponemos a la distribución secundaria, decimos que no es correcto beneficiar a provincias que parece que tienen derecho a la gobernabilidad y perjudicar a otras que no tienen ese derecho.

Cuando nos manejamos con la realidad económica, que es producto del acuerdo de 1986, y la comparamos con lo que establece este proyecto, vemos que todas las provincias son perjudicadas, salvo aquellas que parece tienen derecho a la gobernabilidad.

La segunda afirmación es que las provincias peronistas tenemos "obras públicas cero", y ahora nos enteramos de que las provincias radicales también tiene "obras públicas cero". Entonces, tenemos que cerrar el Ministerio de Obras Públicas.

Sr. Brasesco. — Es una buena idea. (*Risas.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: en lo que respecta a la remisión de fondos tengo información de que mañana se cumpliría con la correspondiente a la cuarta semana del mes de diciembre y que Hacienda piensa girar las remesas correspondientes a enero a partir de la semana próxima. Lo que no se nos explicó es si esto está condicionado o no a la aprobación de estas leyes.

Sr. Brasesco. — Que se cierre el debate.

Sr. Presidente. — La Presidencia va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes:

Sr. Brasesco. — Se encuentran cuarenta senadores presentes, señor presidente: hay quórum.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de orden del señor senador Romero Feris de que el proyecto pase a comisión.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. — Se va a votar en general el proyecto.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

7

AHORRO OBLIGATORIO Y NUEVAS NORMAS TRIBUTARIAS

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se establece un régimen de ahorro obligatorio, se crean nuevos impuestos, se introducen modificaciones a algunas de las normas tributarias vigentes y se fijan restricciones a la transmisión de cheques.

Por Secretaría se dará lectura.

—Se lee nuevamente el proyecto de ley que figura en el punto VI/2 de los Asuntos Entrados.

Sr. Presidente. — La Presidencia informa que hay cuatro señores senadores anotados para hablar. Si desean incorporarse otros senadores, pueden hacerlo.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Nápoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Se entiende que la lista de oradores está confeccionada, pero que con posterioridad, otros pueden anotarse.

Sr. Presidente. — Sí, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: debemos ahora tratar el proyecto de ley en revisión que contiene modificaciones al régimen tributario argentino, la incorporación de algunas disposiciones nuevas y otras reglamentaciones fundadas en la emergencia económica que vivimos.

Se origina en un mensaje del Poder Ejecutivo enviado al Congreso en sesiones extraordinarias, y el proyecto ha sufrido profundas modificaciones en la Cámara de Diputados como consecuencia de un análisis previo de las distintas bancadas para alcanzar el consenso.

Esta ley, señor presidente, que puede ser llamada ómnibus, contiene varios títulos; son diez en total, y algunos tratan de imposiciones transitorias mientras otras son de carácter permanente.

Es transitorio el sistema de ahorro obligatorio, como también lo son el que grava a los